

**NONO:**  
**Movilización Política y Migración Campesina**  
**El Caso de una Parroquia Rural de Quito**

José Antonio Figueroa

Ana Carrillo  
Raúl Moscoso  
Melissa Moreano  
Asistentes de Investigación

# José Antonio Figueroa

Investigador  
del Instituto de la Ciudad de Quito.  
AÑO 2010 - 2011

- Actualmente es Miembro del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES)

Ph.D. Literatura hispanoamericana y estudios culturales,  
Georgetown University.

- Ph.D en Antropología, Universidad Rovira i Virgili
- Master en Antropología andina, FLACSO Quito.
- Licenciado en antropología Universidad Católica

## **Autor de Libros:**

- Relismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe Colombiano
  - Del Nacionalismo al Exilio Interior: el contraste de la experiencia modernista en Cataluña y los Andes Americanos
  - El Levantamiento Indígena del Inti Raymi de Junio de 1990, en coautoría con Segundo Moreno

Más de veinte artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales

## **Ha sido profesor en las Universidades:**

Javeriana, Nacional y los Andes de Colombia  
Georgetown y Michigan, en Estados Unidos  
Católica, IAEN, Flacso y Andina en Ecuador.

TRABAJO  
Alfonso Rodríguez y Miguel Ángel Campesino  
El Estado y los Partidos Políticos en Ecuador

Por Alfonso Rodríguez

Alfonso Rodríguez  
Miguel Ángel Campesino  
El Estado y los Partidos Políticos en Ecuador

© 2012, José Antonio Figueroa  
© 2012, DMQ

Derecho de autor N°  
Depósito legal N°  
ISBN:

Diagramación:  
Foto:

Imprenta:  
Quito, 2012

La reproducción parcial o total de esta obra,  
por cualquier medio, sin el consentimiento expreso  
de los titulares del copyright, está prohibida  
al amparo de la legislación vigente.

Impreso en Ecuador  
Printed in Ecuador



## Presentación

La ciudad de Quito se constituye en un todo complejo en el que conviven realidades muy variadas. Si analizamos los datos del último censo de Población y Vivienda del año 2010 esta ciudad es la que más ha crecido en el país en los últimos 10 años. Desde el 2001 hasta la actualidad se registra un incremento de 400.000 habitantes en el Distrito Metropolitano. Este fenómeno se debe sobre todo a los procesos migratorios; la tendencia a movilizarse del campo a la ciudad no se ha detenido y sigue siendo un fenómeno vigente; que muchos investigadores sociales han olvidado.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados para atender a los sectores más vulnerables de la población quiteña (que coincidentemente se componen principalmente de migrante), de los programas impulsados para legalizar lotizaciones irregulares, de los planes para dotarlas de servicios básicos, la acción municipal será insuficiente si no se buscan respuestas que vayan más allá de la atención a sus requerimientos más inmediatos.

Efectivamente la migración campesina presenta diferentes motivaciones y algunas de estas se pueden encontrar en esta investigación que se pone a consideración de la ciudad. Las razones que motivan fenómenos sociales como el de la movilidad humana están arraigadas en una historia, en un espacio, en un territorio y en una construcción de imaginarios. Los actores sociales involucrados en estos procesos llevan en su interior una marca que ha sido transmitida de generación en generación que, con valores y en determinadas condiciones y contextos, impulsan su actuar y su toma de decisiones.

En este sentido creemos importante descubrir la gran diversidad de y en Quito; pues es en este descubrimiento que se puede alcanzar el desafío de una ciudad incluyente, en la que los distintos actores sociales que habitan en esta ciudad participen, tengan voz, y vivan en condiciones dignas; en resumen hagan suyo al Distrito. Este libro pretende pues, ser un aporte del Municipio de Quito así como de los investigadores del Instituto de la Ciudad para esta construcción del Quito que queremos.

Esta investigación nos remonta a los viejos debates Barsky-Guerrero sobre el o los procesos de des -constitución de la hacienda huasipunguera en la serranía ecuatoriana así como de las formas de penetración del modo de producción capitalista con sus propias particularidades en el nor-oriente de Quito; para a través de este recuento aportar en la comprensión del permanente fenómeno migratorio a la ciudad.

El relato presentado nos invita a conocer los procesos históricos que se vivieron en las comunidades de Alaspungo, Alambi, Yanacocha, en Nono y en la Hacienda la Merced con sus específicos procesos campesinos de apropiación de tierras; pero todas con un presente similar, una marca invariable que se vive en ese y muchos otros sectores rurales del país, la migración del campo a la ciudad.

Se constata que las nuevas generaciones no avizoran un futuro prometedor en sus comunidades de origen y deciden migrar a la ciudad; en búsqueda de mejores perspectivas de vida, en especial, para sus hijos dadas las opciones en educación y en salud que ésta les ofrece; y, para ello se insertan en el mercado laboral sea en la construcción; en el servicio doméstico; o en la esfera del "comercio informal".

Es por esto que el presente trabajo investigativo proporciona algunas claves para entender los fenómenos sociales que se viven en el Quito urbano y rural, pero abre nuevas interrogantes para sus lectores.

Augusto Barrera G  
Alcadel del DMQ

Diego Mancheno P.  
Director del Instituto de la Ciudad

# Contenido

<b>I. Introducción</b>	7
<b>II. Elementos Metodológicos:</b>	
La antropología pública, la etnografía dialógico-crítica y el trabajo colaborativo	13
<b>III. Historia de las Haciendas</b>	
Alaspungo, el levantamiento campesino en san eloy	23
Alambi, la economía moral y la hacienda	30
Yanacocha, el ausentismo terrateniente y la organización campesina	32
Hacienda la merced, un conflictivo proyecto de las élites	35
<b>IV. La creación y disolución de las comunidades en nono: de la asociatividad al neoliberalismo en el campo</b>	41
Las comunidades en alaspungo y alambi y su disolución: enseñanzas políticas de un proceso	46
La comunidad como reto político	54
La disolución de las comunidades, el neoliberalismo y la expulsión campesina hacia el noroccidente de quito	56
Indagando etnográficamente las razones de la pobreza entre la pobreza	62
Migrando a quito	67
<b>V. Conclusiones</b>	71
<b>VI. Bibliografía</b>	75
<b>Anexo</b>	
Recomendaciones de políticas públicas rurales	
Propuesta de políticas públicas agrarias	81
Políticas públicas para crear mecanismos de procesamiento industrial y comercialización de la producción de la parroquia	84
Políticas públicas para los problemas de despoblamiento de la zona de nono	89
Políticas públicas para el área ambiental	92
Políticas públicas para el campo de la educación y la salud	94
Políticas públicas para el campo de la cultura y la política	96

# Introducción

El análisis de las parroquias rurales de Quito es un asunto estratégico. Distintos estudios de las denominadas interfases periurbanas sostienen que el análisis e investigación de las conexiones entre lo urbano y lo rural ofrece contribuciones fundamentales para el diseño de políticas públicas a favor tanto de los espacios urbanos como de los rurales. Asimismo, permite detectar las continuidades y discontinuidades en las problemáticas urbanas y rurales e incluso demuestra empíricamente la justeza o no de dicha categorización.

Por ello, el Instituto de la Ciudad se propuso como una de sus líneas centrales la investigación de las parroquias rurales de Quito, y el trabajo realizado en la parroquia de Nono ha demostrado la pertinencia del desarrollo de esta línea de problemas. Nono es una parroquia cuya cabecera se localiza a solo 18 kilómetros de la capital, pero que a pesar de esta cercanía tan visible aparece como un mundo distante y desarticulado de la historia y de los procesos de la ciudad de Quito.

Las altas tasas de migración que se revierten en un dramático despoblamiento de la parroquia, el envejecimiento apresurado de los pocos habitantes que van quedando, los graves problemas relacionados con la pérdida de fertilidad de los suelos, el empobrecimiento de la población local junto a la existencia de una dinámica industria lechera controlada por un grupo de haciendas altamente tecnificadas, entre otros, constituyen solo algunos de los problemas que afectan directamente a la capital. Estos distintos factores justifican en sí mismos la implementación de políticas públicas para los espacios rurales que estén sustentadas en estudios que visibilicen las dinámicas existentes entre Quito y sus parroquias rurales.

Entre algunos de los efectos que golpean directamente a la capital encontramos el crecimiento anárquico y deficitario en infraestructura de varios de los barrios ubicados en las faldas del Pichincha; la llegada a la ciudad de contingentes poblacionales entrenados para la agricultura y sin más opciones laborales que eventuales trabajos como albañiles o como empleadas domésticas; el deterioro ambiental de los bosques que rodean a la ciudad y el apareamiento de un complejo futuro en lo que respecta a las crecientes dificultades en el acceso a alimentos y agua. La investigación de Nono ofrece algunos elementos para la comprensión de este panorama que se presenta en algunas de las zonas rurales de Quito.

Este estudio se realizó a partir de dos estrategias metodológicas principales: una aproximación desde la historia social de Nono, que se ubica a partir de los años sesenta, y un trabajo etnográfico participante enfocado en problemas del presente y realizado mediante entrevistas, testimonios, talleres grupales y observación.

La reconstrucción de la historia social de Nono está marcada por una coyuntura de importantes transformaciones en el espacio rural del país: los dos procesos de la Reforma Agraria de 1964 y 1972; la disolución de los huasipungos y de ciertas formas de precarismo; la compra de parcelas y terrenos por parte de los antiguos precaristas, que comparados con los hacendados administraron sus propiedades en contextos de grandes asimetrías; la consolidación del modelo de hacienda ganadera de tipo empresarial, con una producción enfocada en el mercado externo; el difícil proceso de negociaciones internas en los que entraron los ex huasipungueros para administrar sus propiedades; el apareamiento y consolidación del control de la propiedad agraria ejercido por las transnacionales de abonos, semillas y fertilizantes; el despoblamiento e incertidumbres del actual presente de los pobladores de Nono, entre otros.

La historia social de Nono ha sido reconstruida, principalmente, a través de más de veinte testimonios de campesinos y campesinas, propietarios de haciendas, líderes políticos, funcionarios o ex funcionarios públicos, así como de muchos de los que han migrado de Nono y hoy viven y enfrentan su futuro en los barrios de las faldas del Pichincha en Quito.

Tanto para la elaboración de los testimonios sobre la reconstrucción de la historia social, como para las etnografías sobre problemáticas del presente, se ha tenido en cuenta una aproximación a la realidad parroquial a través de lo que tentativamente podemos llamar una metodología dialógico-crítica, deudora de una corriente que ha tenido gran impacto en las investigaciones latinoamericanas, como la investigación-acción, y de contribuciones recientes en el campo la etnografía colaborativa y la antropología pública.

Cabe señalar que hay algunos elementos específicos de la metodología dialógico-crítica que marcan ciertas diferencias con los métodos mencionados anteriormente. Sus especificidades, cercanías y distancias respecto a la investigación-acción y a la etnografía colaborativa se señalarán en el acápite metodológico. Sin embargo, un hecho definitivo que pauta el presente trabajo es el vínculo institucional del Instituto de la Ciudad con el Municipio de Quito y con la actual administración de Augusto Barrera.



Como se verá a lo largo de este trabajo, la parroquia de Nono atraviesa una serie de dificultades que motivan la realización de investigaciones encaminadas a detectar sus causas, que ofrezcan herramientas para una decidida intervención del Municipio a través del diseño e implementación de políticas públicas que consideren el carácter co-participativo que ha tenido la presente investigación.

Este trabajo se inscribe en unas condiciones políticas e institucionales específicas que determinan sus elementos teóricos, políticos y metodológicos. La principal responsabilidad de la investigación recae en un instituto adscrito al Municipio de Quito, por lo que la producción del mismo sirve para trazar un puente entre la Alcaldía de la Ciudad, el Concejo Municipal y los pobladores de Nono.

La posición oficial de la actual administración reconoce como un tema central las relaciones entre los espacios urbanos y rurales y propone la construcción de un modelo de vida que busque la equidad social y territorial "... entendida como la construcción de un desarrollo solidario, justo y equilibrado tanto en el ámbito urbano como rural".

En este sentido, las investigaciones que se realicen desde el Instituto de la Ciudad están determinadas por la necesidad de una intervención social que busque cumplir la meta de la equidad propuesta. Por ello, el Instituto ha abierto una línea dedicada a investigar e intervenir en las problemáticas rurales de la ciudad de Quito sobre la evidencia de que existe una serie de conexiones entre varios de los problemas específicos de las áreas urbanas y las áreas rurales. Tanto el carácter institucional del Instituto, como el reconocimiento de las conexiones que hay entre la problemática rural y la problemática urbana, son dos condicionantes que determinan el tipo de aproximación teórica y metodológica del presente trabajo.

Como se hará explícito a lo largo del texto, la historia social contemporánea de la parroquia de Nono puede trazarse a partir de cuatro o cinco grandes eventos. Éstos pueden convertirse en los ejes que permitan comprender los mayores desafíos sociales y políticos que encontramos en la parroquia: en primer lugar, es notorio el triunfo de la hacienda ganadera. Este acontecimiento será rastreado al asumir los interrogantes que se abrieron en estudios clásicos del pensamiento social ecuatoriano y que se sintetizaron en el debate que se dio entre Oswaldo Barsky (1984) y Andrés Guerrero (1975; 1983) en torno a cuál fue el sector social que lideró las transformaciones agrarias de los años sesenta y setenta.

De acuerdo a Barsky (1984), desde antes de mediados del siglo XX los terratenientes de Pichincha introdujeron innovaciones tecnológicas en la ganadería como producto de sus inversiones capitalistas. Tomando como eje una clasificación propuesta por Barahona (1965), que diferencia los tipos de iniciativas adelantadas por los sectores terratenientes en el contexto de las transformaciones agrarias del siglo XX, Barsky (1984) sostiene que un importante sector de hacendados que encabezó las transformaciones agrarias apostó por opciones modernas, porque la modalidad precedente de extracción de la renta, basada en la explotación extensiva de la mano de obra campesina, en vez de constituirse en un elemento de capitalización, se convertía en una traba para los propios hacendados. Guerrero (1975; 1983), por su parte, en la descripción de la "clase terrateniente" señalaba que este sector era renuente a hacer una reinversión sistemática de la renta en la agricultura, por lo que nunca alcanzó el estatus de capitalista, con lo cual la causa definitiva de la transformación agraria estuvo en las disposiciones estatales que dieron origen a la reforma de 1964. Barsky (1984) señaló a lo largo de su trabajo que este proyecto se había realizado con fuerza en el caso de Pichincha y Carchi.

En el caso específico de Nono, los resultados de la presente investigación parecen darle la razón a Barsky (1984), ya que se evidenció el carácter funcional que tuvo para el proyecto hacendatario-ganadero la expulsión de los huasipungueros. En la mayoría de los casos los hacendados aceptaron sin muchas reticencias las exigencias del Estado ecuatoriano cuando demandaba que se entregaran tierras a los ex huasipungueros. La venta de terrenos, que en varios casos hizo que las familias campesinas adquirieran algo más de tres hectáreas en las tierras menos provechosas de la parroquia, se convirtió en un factor que permitió que las haciendas ganaderas se librarán de la presión de los campesinos, mientras éstos debieron afrontar un futuro cargado de incertidumbres económicas.

Las incertidumbres afrontadas por los campesinos es el segundo eje que articula la historia social de la parroquia. Como se verá a lo largo del trabajo, una vez que fueron expulsados de las haciendas, los campesinos de Nono quedaron expuestos a unas condiciones de inequidad y de pobreza que se reflejaron en el hecho de que la parroquia deviniera la más pobre del Distrito Metropolitano de Quito. Esto produjo, además, una de las más altas tasas de migración hacia la ciudad de Quito, adonde llegaron los noneños a fundar nuevos barrios o a ubicarse en los ya existentes en las laderas del Pichincha.

En la presente investigación, a partir de los testimonios de los propios campesinos y de una aproximación a la historia agraria regional, hemos indagado tanto en las razones estructurales como en las propias incapacidades

que tuvieron los campesinos de desarrollar una estrategia económica y política que les hubiera permitido afrontar de un mejor modo los nuevos retos del presente. En este caso, de un modo co-participativo con los ex trabajadores, los ex huasipungueros y los ex arrimados de la hacienda, se elaboró una agenda de investigación que ayudó a detectar algunas de las razones por las cuales éstos fueron incapaces de desarrollar estrategias que evitaran el colapso demográfico y social del sector campesino de la parroquia.

Interesados en rastrear las razones culturales y políticas de ese colapso y los retos que esta situación plantea para el diseño de un modelo de vida democrático de la ciudad, pusimos especial énfasis en indagar los modos de organización de los campesinos cuando tuvieron que administrar las tierras que fueron compradas a los hacendados entre los años sesenta y setenta del siglo XX. Además del acceso diferenciado a los recursos por parte de las haciendas y los ex-trabajadores, que se derivó de los dos procesos de Reforma Agraria, este trabajo exploró etnográficamente con los propios ex trabajadores las complejas negociaciones que realizaron respecto al trabajo comunal e individual desde el momento en que adquirieron la autonomía de la hacienda. Esta exploración se hizo a través de una serie de diálogos francos mediante los cuales intentamos detectar mutuamente, entre los ex comuneros y el etnógrafo, las grandes dificultades que experimentaron al intentar negociar de manera colectiva la administración de algunos de los bienes, las tierras o algunas porciones de las tierras que recibieron luego de la Reforma Agraria.

Esta experiencia nos permitió atribuir a muchas de las herencias culturales la responsabilidad del fracaso que a la postre experimentaron los comuneros en la administración de sus bienes colectivos e individuales, lo que conllevó el aumento de la brecha entre el poder hacendatario y el de sus ex trabajadores. Estas herencias también influyeron en la configuración final de una realidad regional marcada por los dramáticos niveles de migración que se produjeron luego de los procesos de Reforma Agraria y de la consolidación del poder hacendatario.

A manera de síntesis podemos decir que el presente trabajo se realizó a partir de unas condiciones específicas: el vínculo institucional del equipo de investigación con el Municipio de Quito, el reconocimiento por parte de la Alcaldía del carácter central de la problemática rural en la administración de la ciudad, y las condiciones de marginalidad económica y social características de los campesinos de la parroquia de Nono, que para ser revertidas requieren de una intervención elaborada participativamente por el Municipio y por los pobladores de Nono.

# Elementos Metodológicos

## La Antropología Pública, La Etnografía Dialógico-crítica y el Trabajo Colaborativo

La metodología del presente trabajo ha estado influida por las implicaciones que ha tenido su elaboración, a cargo de un equipo vinculado institucionalmente a la administración municipal de la ciudad de Quito. El proyecto fue avalado por el Instituto de la Ciudad, perteneciente a la Secretaría de Planificación del Municipio, y ha producido tres resultados: un documento de recomendaciones de políticas públicas, que fue entregado en diciembre de 2010<sup>1</sup>; el presente texto; y un video documental de 32 minutos titulado “Espesismos de una reforma”<sup>2</sup>.

El video documental ha sido presentado ante un auditorio académico en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, sede Quito<sup>3</sup>, y como resultado de los compromisos establecidos con los miembros de las comunidades que participaron en su elaboración fue exhibido en la cabecera parroquial de Nono y también en el barrio de Alaspungo. Esta presentación se dio en el marco de la celebración del 36 aniversario de la toma de la hacienda San Eloy por parte de sus ex trabajadores que residen en ese barrio.

El documental se ha distribuido en varios espacios y se espera que sea visto por una parte significativa de los habitantes de Nono, en los colegios municipales, por un público académico y también por parte de funcionarios adscritos al Municipio con capacidad de intervención y ejecución de políticas públicas. La presentación del documental en la cabecera parroquial de Nono y en Alaspungo confirmó la necesidad, detectada desde el inicio de la investigación por parte del Instituto de la Ciudad, de diseñar varios tipos de productos que pudieran hacer llegar la investigación a distintos públicos, pero especialmente a los habitantes de los barrios de Nono o sus descendientes ubicados en Quito.

---

<sup>1</sup>El documento se anexa al final del trabajo. Su elaboración determinó también la metodología que empleamos, como se verá detallado a lo largo del presente acápite. Las recomendaciones fueron presentadas ante la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del Concejo Metropolitano de Quito en enero del 2011.

<sup>2</sup>El documental, co-dirigido con Raúl Moscoso, investigador del equipo, guarda coherencia con el presente texto y narra en un cierto orden cronológico la época de la hacienda, las transformaciones inducidas por las reformas agrarias de 1964 y 1972, la conformación y disolución de las comunidades campesinas, la entrada del neoliberalismo al agro y la expulsión de los campesinos hacia Quito.

<sup>3</sup>Este acto fue principalmente académico. Sin embargo, al evento fueron invitados como ponentes Emiliano Ramos y Elías Pailachu, del barrio de Alaspungo, quienes ofrecieron vívidos e interesantes análisis tanto del documental como de su propia experiencia política en el contexto de los acontecimientos que forman la narrativa del documental.

Las contribuciones teóricas y metodológicas del presente trabajo se relacionan con una serie de inquietudes que guiaron su elaboración: ¿Es posible rastrear en la historia reciente las causas por las cuales una parroquia como Nono experimenta unas dramáticas condiciones socioeconómicas y una inequidad tan radical que la convierten en la parroquia más pobre del cantón Quito? ¿Cuál fue el sector social que lideró las transformaciones agrarias que ocurrieron en la parroquia de Nono en las décadas de los sesenta y setenta y de qué modo lo hizo? ¿Cómo enfrentaron los campesinos las nuevas condiciones que se dieron después de las reformas agrarias, cuando accedieron a porciones de tierras? ¿Cómo influyeron las nuevas condiciones que enfrentaron los campesinos a partir de los años ochenta en una cadena de fenómenos como la migración a los barrios noroccidentales de Quito, la entrada del neoliberalismo en el agro y el desdoblamiento de la parroquia? ¿Cuáles son algunos de los retos más importantes que enfrentan hoy los campesinos de Nono y sus descendientes que viven en Quito?

En este trabajo se ha dado un gran peso a la historia oral (Vansina, 1986; Porteli, 1991; Yáñez, 1986) y se han recogido varias de las contribuciones provenientes de los estudios agrarios ecuatorianos (Bretón, 2000; 2001; Martínez, 2000 a; 2000 b; Barski, 1984; Guerrero, 1975; 1983), en la medida en que permitieron comprender las actuales condiciones que enfrentan los campesinos que aún viven en Nono, tanto como la inmensa mayoría que se ha desplazado hacia los barrios marginales de Quito. De gran utilidad también han sido algunos estudios que señalan ciertos elementos clave del neoliberalismo en el agro, que permitieron constatar el modo como impactan en las economías campesinas el monocultivo, el uso irracional de abonos químicos, pesticidas y fungicidas (Martínez, 2000; Burch, 2007; Rubio, 2003; Harvey, 1998). La identificación de las conexiones entre lo urbano y lo rural fue facilitada a partir de algunas contribuciones dedicadas al estudio de las denominadas interfases periurbanas (Allen y Lacabana, 2003; Gurovich, 2003). Estos estudios son fundamentales para mostrar el carácter ineludible que tiene el análisis de las zonas rurales para una comprensión más integral de las problemáticas urbanas.

En términos teórico-metodológicos se recogió una serie de contribuciones provenientes principalmente de cuatro grandes corrientes: en primer lugar, de la etnografía colaborativa (Rappaport, 2005; 2007; Lassiter, 2001; Mandel Butler, 2009; Peacock, 1997; Gerstl-Pepin y Gunzenhauser, 2002), que muestra la urgente necesidad que hay en las ciencias sociales de elaborar procesos de co-teorización con los individuos y las poblaciones con quienes trabajan los etnógrafos.

En segundo lugar, de la antropología pública, que reclama la construcción de agendas investigativas que sean pertinentes para los grupos con los que se trabaja (Venkateswar, 2009; Checker, 2009; Macgranahan, 2006; Goode, 2009; Scheper-Hughes, 2009). En tercer lugar, de la investigación-acción, creada en el contexto latinoamericano (Fals Borda, 1986; Paulo Freire, 1970). Y finalmente, de un conjunto de trabajos que proponen una crítica a las tendencias esencialistas que construyen a la cultura como un lugar de escape del presente y de los conflictos políticos de las experiencias de la modernidad, lo que ayuda a construir un conservadurismo que afianza las condiciones neocoloniales (Fabian, 1983; Ferguson, 2002; Figueroa, 2009).

Se puede decir que estas propuestas metodológicas son implicaciones recientes del cuestionamiento que desde los años sesenta se ha hecho a la verticalidad y al autoritarismo que caracteriza las normativas disciplinarias académicas convencionales. También son resultado de las demandas que surgen en el trabajo etnográfico en Latinoamérica, donde se pone énfasis en la necesidad de establecer conexiones entre la investigación social y una militancia a favor de las causas de los desposeídos (Fals Borda, 1986; Paulo Freire, 1970). En el caso de Ecuador, otro elemento reciente tiene que ver con la explícita voluntad tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, de rescatar el papel de la investigación con el objeto de establecer políticas de planificación pública.

En este trabajo se comparte con Foucault (1977) y con varios teóricos que de una u otra forma utilizan su método genealógico, la crítica radical al autoritarismo que caracteriza las disciplinas sociales modernas y también se reconoce la importancia del compromiso político como característica de una investigación social pertinente. Sin embargo, en las urgentes condiciones de los países latinoamericanos, el abandono nihilista del humanismo y su reducción a la simple razón instrumental, como dos consecuencias que se derivan tanto de Foucault como de autores cercanos a la investigación-acción, puede ser políticamente devastador (Spivak, 2003; Said, 1990; Figueroa, 2009). En la presente investigación, uno de los reclamos constantes hechos por los ex trabajadores y ex huasipungueros de las haciendas de Nono, es el de su participación amplia y democrática en beneficios universales de la modernidad, como la salud y la educación. Estos reclamos contrastan con las propuestas que teóricos posmodernos realizan a través de una sistemática cruzada contra el humanismo, presuponiendo que los sectores populares y étnicos deben refugiarse en sus propias tradiciones o en sus condiciones particulares de existencia, como mecanismo de resistencia cultural al capitalismo (Escobar, 1995; Mignolo, 2001).

Al indagar empíricamente en las aspiraciones de sectores populares como los campesinos y ex huasipungueros de una parroquia rural de Quito como Nono, lo que encontramos más bien fue que la mayoría de nuestros entrevistados, en el análisis de sus condiciones de existencia, expresó una plena conciencia política de las causas de la marginalización en la que se encuentra y reclamó sus derechos de tener un pleno acceso a las promesas ofrecidas por la modernidad.<sup>4</sup>

Las reflexiones y aspiraciones de los campesinos y ex huasipungueros de Nono hacen pensar en la crítica que Spivak (2003) formulara a Foucault y a Deleuze (1977) respecto al lugar que ocupan los reclamos de los subalternos en las luchas políticas. Recordemos que el desencanto de Foucault y Deleuze (1977) con los partidos comunistas les motivó a validar como política cualquier acción contestataria de los subalternos, especialmente aquellas que hicieran en sus propias localidades y por fuera de las directrices de las organizaciones y partidos, presuponiendo que al ser apoyadas por aparatos institucionalizados y con tendencias más universales, se deslegitimaría y perderían su verdadero carácter conspirativo.

Spivak (2002), por el contrario, demostró que un acto no se convierte en político si no está vinculado a una expresa intencionalidad que vaya más allá de su simple ejecución. Spivak (2002) recurre al dramático caso del suicidio de la joven Bhuvaneswari Bhaduri, militante hindú de la resistencia contra el colonialismo británico, acto que fue interpretado dentro del código patriarcal de la India, que concibe el suicidio femenino como una acción que busca limpiar una mancha de honor, generalmente asociada a embarazos no deseados según la tradición masculina de ese país. Esta interpretación se convirtió en una especie de versión oficial, a pesar de que la joven premeditadamente eligió su suicidio durante su periodo menstrual, previendo la explicación patriarcal de su acto. A pesar de las evidencias de que su acto no fue motivado por el honor sino más bien por razones políticas, esto fue desconocido en las distintas interpretaciones de su muerte. Solo el proceso de institucionalización del quehacer académico y político de la propia Spivak, la escritura del acto y la discusión en foros públicos suscitados por la escritora, pudo poner en tela de juicio la interpretación patriarcal del suicidio y colocarlo en una tradición política cuestionadora del colonialismo.

---

<sup>4</sup> Como veremos a lo largo del texto, los pobladores de Nono son, en su casi totalidad, adultos mayores cuyas aspiraciones personales son especialmente cambiar las condiciones de producción, reclamar mayor presencia del Estado y lograr un poco de capitalización. Guardan grandes expectativas en el sueño de la mejoría de las condiciones de vida de sus grupos familiares, por lo que han apoyado la salida permanente de sus hijos y nietos hacia Quito.

En la experiencia de Nono, los ex huasipungueros y ex trabajadores guardan memorias muy positivas de la institucionalización y del papel que jugó este proceso en la politización de sus acciones, al considerar como fundamental el apoyo que recibieron de organizaciones políticas nacionales y de militantes vinculados a la Teología de la Liberación. Dos de los líderes más importantes de las movilizaciones, Elías Pailachu y Emiliano Ramos, del barrio de Alaspungo, incluso reflexionaron sobre la reclusión que vivían en las haciendas tradicionales en la época en que éstas tenían el control de la población trabajadora, y atribuyeron esa condición a su propia imposibilidad de formular reclamos políticos.

Por lo tanto, tuvo gran importancia para ellos su contacto posterior con organizaciones como la ECUARUNARI -Ecuador Runacunapac Riccharimui- y con una serie de actores e instituciones externas, solidarios con las luchas campesinas, que fueron a Nono justo durante la hegemonía de la hacienda. Estas personas y organizaciones funcionaron como “exteriores discursivos” (Laclau y Mouffe, 2004) fundamentales en su proceso de adquisición de una plena conciencia política. La militancia en estas organizaciones no solo significó su conversión política, sino que marcó el futuro personal de la mayoría de quienes pertenecieron a la organización, como veremos más adelante.

Las contribuciones de la etnografía colaborativa también se han ajustado a las condiciones específicas de realización de este trabajo. Esta corriente propone otorgar a los miembros de las comunidades con las que trabajan los antropólogos el reconocimiento y valoración como co-teorizadores y co-gestores de proyectos, en lugar de ser sólo valorados como fuentes de información. La influencia del posmodernismo en la etnografía colaborativa norteamericana hizo que en una época se pusiera un gran énfasis en el papel de los miembros de las comunidades en la redacción, edición y escritura de los informes y los libros escritos por los etnógrafos.

Sin embargo, autores como Rappaport (2010) y Lassiter (2005) señalan los límites que tiene acentuar el interés primordialmente en la escritura, lo que consideran además un asunto específico de la academia norteamericana. Tomando como base su experiencia de trabajo de campo en un país como Colombia, donde existe una tradición de colaboración y la práctica antropológica en las relaciones de los etnógrafos con las comunidades tiene connotaciones políticas evidentes, Rappaport (2010) propone más bien que la colaboración sea entendida más en el trabajo de campo que en la escritura. Desde su perspectiva, la colaboración debe hacerse explícitamente en cada fase del trabajo, desde la conceptualización de los proyectos hasta la escritura, la cual debe incluir incluso los comentarios de los consultados.



En el presente estudio, las condiciones de la elaboración de la investigación colocaron en un segundo plano la preocupación por la escritura e hicieron poner énfasis en los acuerdos con las comunidades de Nono, tendientes a determinar la pertinencia de las temáticas que fueron investigadas con más cuidado durante el trabajo de campo. Un especial interés en el aspecto colaborativo se dio en las conversaciones y discusiones que permitieron elaborar el documento de políticas públicas para la intervención en parroquias rurales. De otro lado, los distintos capítulos fueron redactados con una citación cuidadosa de los nombres de los informantes en el momento en que respondieron o cuando discutimos sobre los temas de la investigación en entrevistas en profundidad.

El presente trabajo inició en julio de 2010 y la investigación de campo terminó en diciembre del mismo año, con un número de visitas de aproximadamente tres días a la semana a la parroquia de Nono, durante unas veinte semanas. El trabajo fue diseñado desde el Instituto de la Ciudad y estuvo comprometido con la comunidad desde el inicio para elaborar documentos de políticas públicas para la intervención en parroquias rurales de Quito, que compartieran las características de Nono: pobreza, marginalidad, emigración de la mayoría de la población hacia Quito, problemas de salud y educación, etc.

En el proceso de investigación se indagó con los propios miembros de las comunidades no solo la pertinencia de los temas, sino que también se discutieron de manera compartida muchas de las políticas públicas que se recomiendan al Municipio. Este carácter compartido de la elaboración del documento de políticas públicas implicó una noción de colaboración que no solo reconoce el papel fundamental de las voces de los ex huasipungueros de Nono, sino que también presupone un reconocimiento no culposo de la voz de los investigadores.

Como se sabe, otra de las críticas anti-humanistas de Foucault tiene que ver con el devastador ejercicio que se ha hecho en contra del "lenguaje experto". En importantes obras académicas como las de Said (1978) se muestra cómo, efectivamente, las empresas de conquista y colonización además de acciones militares son también la puesta en ejecución de toda una serie de narrativas y de ejercicios que ayudan a construir las imágenes dominantes sobre el otro y justifican así su dominación. El poder no es principalmente un ejercicio de fuerza coactiva, sino un complejo entramado en el que a la fuerza se une un conjunto sistemático de ideas, en el cual los expertos, como voces autorizadas, juegan un papel fundamental.

Sin embargo, uno de los resultados de la crítica foucaultiana ha sido el desconocimiento de los elementos emancipatorios que tiene el propio conocimiento, como lo muestra también Said en su notable empeño de resarcir un tipo de humanismo emancipador urgentemente necesitado, sobre todo en contextos que han sufrido profundas experiencias coloniales (Said, 1978). Otra de las mismas evidencias que muestra el valor de los elementos emancipatorios del saber tecno-científico y humanístico la encontramos en la sistemática lucha que los sectores subalternos han hecho a favor del acceso pleno a los beneficios de la educación (De La Cadena, 2000; Dubois, 1989). En este sentido, entre los habitantes de Nono y los miembros del equipo de investigación, en varias ocasiones se realizaron diálogos en los que se reconocieron las competencias mutuas y se hicieron explícitos los desacuerdos. Así, tanto en el documento de elaboración de políticas públicas, como en el informe final, en el documental y en las muchas sesiones que significó la presente investigación, la voz de los investigadores se ha hecho presente sin abandonar la apuesta ética por la horizontalidad y el respeto mutuo en las relaciones que se establecieron con los pobladores de Nono (Scheper Hughes, 1995).

El trabajo de campo y la elaboración del documento consistieron, más que en una co-teorización, en una indagación mutua de los mecanismos a través de los cuales se produjo el triunfo de las haciendas ganaderas, de las causas del fracaso de las experiencias campesinas que pudieron haber representado una alternativa a la hacienda ganadera, de cómo se produjo el impacto del neoliberalismo en la parroquia y las dificultades de los campesinos para garantizar la soberanía alimentaria de los pobladores de los barrios y comunidades de Nono. Urgidos por estas preocupaciones, las entrevistas se convirtieron en diálogos y conversaciones en las que mutuamente establecíamos aproximaciones a los problemas y diseñábamos posibles soluciones. Esta aproximación fue clave para el diseño de las políticas públicas recomendadas al Municipio que aparecen como anexo al final del trabajo.

La delimitación de la investigación y los resultados también recogen una contribución de una reciente derivación de la antropología aplicada, denominada antropología pública, que propone que la investigación social vaya acompañada simultáneamente de la intervención social, sin abandonar la elaboración de sofisticadas herramientas teóricas de análisis, (Venkateswar, 2009; Checker, 2009; Macgranahan, 2006; Goode, 2009; Scheper-Hughes, 2009). La antropología pública se encuentra a tono con los métodos de investigación-acción propuestos y desarrollados por varios autores latinoamericanos (Fals Borda, 1986; Paulo Freire, 1970).

Hay que anotar, sin embargo, que en el presente trabajo se ha dado prioridad al cambio social. Por eso se ha propuesto una metodología que permita indagar las razones estructurales y culturales que han contribuido a crear las difíciles condiciones que caracterizan la vida social y económica de los ex trabajadores de las haciendas de Nono. Esta metodología se realizó a partir de una serie de diálogos francos entre el etnógrafo y varios de los habitantes de la parroquia. En un trabajo previo (Figuroa, 2009) se había empleado una metodología similar, pero aplicada a una realidad más textual. En el presente trabajo esta metodología se aplicó en el contexto de una etnografía más convencional, llevada a cabo entre los ex trabajadores y ex trabajadoras de las haciendas de Nono.

Estos componentes metodológicos que se pueden catalogar como dialógico-críticos encontraron un lugar especial durante el análisis hecho con los propios habitantes de los barrios de Nono sobre las razones por las cuales fracasaron los proyectos comunitarios luego de los procesos de reformas agrarias de los años sesenta y setenta del siglo pasado. En este caso, además de las razones estructurales como la calidad y el tamaño de las tierras que poseyeron las familias de los ex huasipungueros, se exploraron las razones que definieron el fracaso de la comunidad y que generalmente son expuestas solo en el chisme y el rumor. Algunos de los ex trabajadores hicieron referencia a la falta de compromisos, a la mala administración de los créditos, a la poca disponibilidad al trabajo de ciertas familias, entre otros, como se expone en el capítulo correspondiente.

En Latinoamérica, por lo menos desde los años setenta, la confluencia de propuestas provenientes de la izquierda, la Teología de la Liberación y una efervescente movilización popular, fueron factores que hicieron que diversos investigadores sociales conectaran sus investigaciones con las dinámicas políticas que experimentaban los sectores populares. Dentro de las corrientes que se han desarrollado en esa perspectiva sobresalen la investigación-acción y las ciencias sociales comprometidas con los oprimidos, como lo planteó la escuela de Paulo Freire (1970). Uno de los autores más representativos de esta corriente es Orlando Fals Borda, quien lideró la investigación-acción a partir de una redefinición de las ciencias sociales y también abogó por unas ciencias sociales comprometidas con el cambio social y la crítica. En su perspectiva, las ciencias sociales deberían hacerse al calor de las luchas sociales, lo que explica su activa participación en los movimientos campesinos de la costa Atlántica colombiana.

Fals Borda también estableció la necesidad de que los conocimientos adquiridos por los investigadores dieran un especial valor al saber popular y sostuvo que los resultados de las investigaciones deberían ser devueltos a los sectores populares, a los que consideraba los verdaderos propietarios de ese saber (Fals Borda, 1986). Sin embargo, este autor terminó por construir una visión esencialista y romántica de lo que entendía como cultura popular. Su perspectiva inhibió la crítica, la autocrítica cultural y el cambio como horizonte necesario en los sectores populares y coincidió con perspectivas conservadoras que deslegitimaron los reclamos de modernidad hechos por los sectores populares. En el caso de la costa Atlántica colombiana, promovió una visión esencialista de la cultura popular y de la cultura regional del campesinado, que coincidía con la de las élites regionales y nacionales que negaron los reclamos de modernidad y promovieron la violencia regional a partir de los años setenta (Figueroa, 2009).

Casi desde los inicios de la antropología en la segunda mitad del siglo XIX, algunos antropólogos han abierto preguntas sobre la pertinencia de las investigaciones para las comunidades y los sujetos con quienes trabajan, en el sentido de cómo la antropología puede responder a los problemas reales que confrontan dichos sujetos y comunidades. Sacar la producción antropológica y etnográfica de los contextos exclusivamente académicos ha sido una petición que algunos sectores han hecho de modo más o menos esporádico a lo largo de la historia de la disciplina.

Algunas de las preocupaciones de la antropología pública son especialmente pertinentes para proyectos antropológicos vinculados al quehacer institucional del Municipio de Quito. Una de las propuestas consiste en vincular explícitamente el quehacer antropológico con el cambio emancipatorio, que involucra no solo a las comunidades con las que se trabaja, sino a la sociedad y a la misma humanidad. Con unas propuestas que van mucho más allá del nihilismo que se esconde bajo el relativismo cultural y en los legados foucaultianos que asocian el humanismo exclusivamente con la razón instrumental, nuevas corrientes empiezan a reconocer el lugar universal de los reclamos de los sectores subalternos y empiezan a cuestionar la fácil respuesta que posestructuralistas y posmodernos ofrecen al simplificar los legados humanistas de la ilustración a la simple razón tecno- burocrática.

## Historia de las Haciendas Alaspungo, el levantamiento campesino en San Eloy

La historia contemporánea de Alaspungo se define por las dos leyes que se promulgaron entre 1964 y 1972, encaminadas a efectivizar la Reforma Agraria. Las leyes de Reforma Agraria se tradujeron en importantes movilizaciones campesinas en haciendas adyacentes, como San Eloy, Chiquilpe y El Zinc. En la primera mitad del siglo XX grandes extensiones de tierra que incluían las haciendas de San Eloy, Chiquilpe, El Zinc y Cruz Loma habían pertenecido a la familia del Castillo Pozo y una parte había sido comprada por el coronel José Eduardo Morales.

De acuerdo al testimonio de Luis del Castillo, la hacienda de Chiquilpe fue agrícola y ganadera. Durante mucho tiempo la producción agrícola de la hacienda llegaba a superar los 300 quintales de papa por cosecha. Tuvo, además, una importante producción de habas, mellocos y ocas. La hacienda había desarrollado unos sistemas de comercialización de su producción en Quito. Los abuelos de Luis del Castillo, propietarios de un camión, llevaban los productos de la hacienda a unas bodegas ubicadas en San Francisco, en el centro de Quito, donde eran dejados en consignación y pagados una vez que fueran vendidos.

Otro rubro importante de la hacienda era la ganadería. Entre los años setenta y ochenta la hacienda de Chiquilpe llegó a producir entre 150 y 200 litros diarios de leche. La producción lechera, sin embargo, no era totalmente tecnificada. Una de las formas que empleaban para la producción consistía en rotar el ganado en las distintas partes de la hacienda: en las partes altas colocaban al "ganado seco", que no estaba produciendo leche. Pero una vez que las vacas se preñaban eran ubicadas en las zonas bajas y planas para evitar que los terneros se despeñaran y murieran.

Según Luis del Castillo, las condiciones de la comercialización obligaban a que los hacendados manejaran un capital suficiente para la compra de semillas, que les permitiera esperar hasta que les pagaran los comerciantes donde dejaban los productos en consignación. La hacienda Chiquilpe era una de las propiedades de los del Castillo, quienes tenían, además, otras propiedades en el occidente de Quito, especialmente por la zona de las calles Riofrío, Checa y América.

En opinión de Luis del Castillo, la producción lechera de Chiquilpe se encontraba relativamente rezagada respecto a otras haciendas que habían introducido mejoras en los pastos, habían importado especies más productivas y tenían solo vacas hembras, a las que fertilizaban artificialmente mediante técnicas como el pajuelo. La leche de la hacienda era entregada a un comerciante, quien la recibía en unas grandes tinas y se encargaba de venderla entre las nueve de la mañana y la una de la tarde en toda la zona de la América, la Alameda y la calle Riofrío.

En la década de los sesenta, y antes de las entregas de huasipungos motivados por la Reforma Agraria, la hacienda de Chiquilpe llegó a tener hasta diez familias de huasipungueros más cuatro empleados encargados de las actividades domésticas: los huasicama. La huasicamía estaba formada por un campesino indígena joven, encargado de circular el ganado entre los terrenos altos y los terrenos bajos, y tres muchachas del servicio, quienes estaban a cargo de planchar, cocinar, arreglar la casa y atender personalmente a los dueños, que eran cinco, formados por la pareja de los propietarios y sus tres hijos.

La familia Del Castillo Pozo optó tempranamente por entregar los huasipungos y el 7 de abril de 1965 firmó las actas de liquidación de reserva y vacaciones a favor de siete huasipungueros, entre ellos: Antonio Quishpe Vaca, Fernando Ramos Quishpe, Emiliano Ramos Quishpe, Dolores Tatayo Simbaña y José Quingalombo, quienes recibieron un promedio de tres hectáreas como parte de los derechos adquiridos luego de 26 años de servicio en la hacienda. Algunos huasipungueros como Emiliano Ramos y su hermano Fernando, quienes tenían menos de diez años trabajando en la hacienda, recibieron la compensación por los 26 años de trabajo de su padre fallecido, que se sumaron a su propio tiempo de trabajo. Las tres hectáreas entregadas equivalían a diez años de trabajo. Se les reconoció, como fondo de reserva, la suma de 90 sucres por año trabajado y un total de 180 sucres por vacaciones no gozadas. La suma total de los fondos de reserva fue cancelada con media hectárea de tierra más. De acuerdo a la valorización de la tierra hecha en el documento, cada hectárea en la zona estaba cotizada en 5 000 sucres, aunque no se hace ninguna referencia a la diferencia de precios asociada a la renta diferencial.

Una vez que se resolvió la presión de los huasipungueros en la década de los setenta, la hacienda Chiquilpe fue arrendada por la familia Jaramillo Arteaga, que hizo una explotación más tecnificada de la ganadería e introdujo mejoras como el ganado holandés.

Los terneros machos que nacían eran vendidos inmediatamente. Solamente se conservaban las hembras, que eran inseminadas artificialmente con el sistema de los pajuelos. Las innovaciones tecnológicas introducidas por los Jaramillo Arteaga permitieron que las vacas llegaran a producir hasta 40 litros de leche diarios, es decir, cinco veces más de lo que se producía antes de la introducción de las innovaciones tecnológicas.

Según el testimonio de Luis del Castillo, los ex huasipungueros de Chiquilpe trabajaron sus tierras, pero estuvieron limitados por las laderas de los terrenos. En terrenos pequeños, de aproximadamente 50 metros, sembraban papas y hortalizas y compraron vacas Friesen para producir quesos que sacaban a los mercados.

La cantidad y calidad de los suelos recibidos, la movilización política que venía ocurriendo y el carácter ausentista del propietario de la hacienda San Eloy fueron factores que hicieron que algunos de los ex trabajadores de Chiquilpe se sumaran a las movilizaciones ocurridas en San Eloy. Estas movilizaciones agrarias fueron las más grandes ocurridas en la historia agraria reciente de Nono.

En la primera mitad del siglo XX, el coronel José Eduardo Morales compró una parte de las grandes extensiones de tierra que incluían las haciendas de San Eloy, Chiquilpe, El Zinc y Cruz Loma, pertenecientes a la familia del Castillo Pozo. De acuerdo con el testimonio de su ex mayordomo y líder campesino de la zona, Elías Pailachu, a fines de los años treinta José Morales fue a Riobamba y lo sedujo a él y a otros familiares suyos con la idea de ir a su hacienda, ofreciéndoles no solo la posibilidad de conocer Quito, sino convenciéndoles de que por la hacienda pasaba el tranvía. Motivados por estas razones, don Elías, su madre y dos hermanos decidieron viajar a Nono, a la hacienda San Eloy, contigua a la hacienda Chiquilpe. También había llegado como mayordomo Juan Bautista Morales, acompañado de su familia y de sus hijos.

Las condiciones de la hacienda no coincidieron para nada con las promesas hechas por el propietario: luego de 16 horas de viaje desde Riobamba arribaron a Quito, donde tuvieron que pedir posada en una casa cerca de Santa Clara, que constituía entonces el límite de la ciudad y estaba ubicada cerca de la estación del tranvía. De esa casa salieron al tercer día a las cinco de la mañana hacia Nono, haciendo un recorrido la mayor parte del tiempo a pie, hasta llegar a San Eloy a las siete de la noche. Se sorprendieron al encontrar solo una choza donde los recibieron con mánchezica y una taza de arroz para que cocinaran.

Las condiciones eran tan duras que Juan Bautista Morales y todos sus familiares murieron al poco tiempo de llegar. Enterado de las muertes, el Coronel José Eduardo Morales, quien vivía en Quito, ordenó quemar las chozas que habían levantado Juan Bautista y sus familiares. Elías Pailachu y su familia tuvieron que desplazarse a otro lugar y construir urgentemente otra choza. Elías sustituyó así al fallecido Juan Bautista en el papel de mayordomo. La choza que construyeron estaba hecha de bahareque y cubierta de paja, porque en ese entonces era muy difícil trasladar tejas o cinc hasta San Eloy.

San Eloy era principalmente una hacienda extractivista, de la que sacaban carbón y quinina. Su propietario pasaba la mayor parte del tiempo en Quito. Había arrendatarios y huasipungueros obligados por el patrón, a causa del uso que hacían de pastos, agua, leña y habitación para sus familias y para sus pocos animales. Muchos de ellos venían de comunidades cercanas como Pucará. Los trabajadores estaban obligados a trabajar seis días en las tierras del propietario, con la excepción del mayordomo, quien podía trabajar tres días en sus terrenos, siempre y cuando no descuidara las labores relacionadas con la administración de la hacienda. El patrón argumentaba que no era necesario pagar nada en dinero porque sus trabajadores tenían en la hacienda todo lo necesario para vivir. Esto se constituyó en uno de los mayores motivos de conflicto, ya que según argumentan los propios trabajadores, estaban necesitados de metálico para acceder a productos como sal, azúcar o arroz, que no eran provistos por la hacienda.

En Chiquilpe, los vínculos forzosos de los trabajadores eran más sofisticados y más eficientes. Según el testimonio de Emiliano Ramos, la hacienda de Chiquilpe había mantenido la sujeción forzosa de sus trabajadores y garantizaba así los distintos roles que éstos cumplían. La familia cercana de Emiliano estaba compuesta por unas diez personas. Su padre había sido un huasipunguero que murió de pulmonía a los 45 años y heredó a sus hijos su sujeción a la hacienda. Emiliano atribuye la muerte de su padre a las duras condiciones en las que trabajaba día y noche. Recuerda que casi siempre mojaba su ropa y no podía siquiera cambiarse, lo que afectó sus pulmones. Los hermanos mayores sustituyeron a su padre en el trabajo. Su madre trabajaba de huasicama y además tenía que atender cualquier otra labor que le pidieran en la hacienda. De niño Emiliano se dedicaba a chugchir<sup>5</sup> en la hacienda. Más tarde, a los quince años, algunos de sus hermanos se habían casado, otros se habían ido a Quito y otros a la montaña; entonces Emiliano se incorporó totalmente como huasipunguero a la hacienda de Chiquilpe, dedicándose a hacer carbón, a limpiar los potreros, desmontar y cultivar principalmente papas, habas y cebollas.

---

<sup>5</sup> Quichuismo que significa recoger los restos después de una cosecha.



Cuenta Emiliano que en el libro de rayas el patrón registraba las cuentas, en las que siempre los campesinos le quedaban debiendo y donde se consignaban los suplidos con los cuales los campesinos podían adquirir la sal y el arroz que no había en la hacienda y que no alcanzaban a comprar con el sucre que recibían como diario por su trabajo. Por las dos o tres hectáreas que recibían estaban comprometidos a trabajar cuatro días a la semana y dedicar uno o dos días a las tierras de sus huasipungos. Tenían que hacer trabajos de huasicamas, cuidando los chanchos y las gallinas y dando de comer al ganado. En épocas de fiestas tenían que coger los caballos para ir a Quito a pintar las casas de los patrones y prender los motores para darles luz. También ayudaban en una hacienda ganadera que los patrones tenían en Nono, donde había mejores pastos y una tierra más plana, que producía más leche en beneficio de la circulación monetaria para la hacienda. En estas condiciones, los trabajadores frecuentemente hacían mingas para compensar la falta de trabajo en sus propias tierras. Como vimos, en Chiquilpe se había hecho una entrega temprana de tierras, que alivió la presión ejercida por los huasipungueros y fue tecnificada hasta su disolución.

Por su lado, en San Eloy, luego de la promulgación de las primeras leyes en la década de los sesenta, el coronel Morales optó por “mandar sacando” a varios de los huasipungueros y arrendatarios para evitar que se tomaran las tierras, pero don Elías Pailachu conservó su lugar en la hacienda gracias a su posición privilegiada como mayordomo. De hecho, el patrón le había entregado una pistola con la orden expresa de que no permitiera la entrada de los comuneros, a quienes acusaba de querer robar agua, leña y de tumbar los árboles. Elías, por su parte, estaba entrando en un proceso de concientización política que lo llevó a participar en varios seminarios, a los que asistía gracias a las ausencias del coronel y por los cuales terminaría alineándose con los campesinos. Por ello, permitía que los comuneros entraran a la hacienda y se hacía el de la “vista gorda” ante los posibles robos que éstos cometieran en la hacienda.

En 1970, don Elías participó de un curso de cooperativismo dictado por el Instituto Ecuatoriano de Formación Social -INEFOS-. Allí conoció la realidad nacional, comprendió la justeza de los reclamos y de los pequeños robos que hacían los comuneros en las haciendas y se inclinó decididamente a promover la Reforma Agraria en la región. A partir de entonces, junto a otros campesinos y campesinas, algunos de los cuales provenían de haciendas vecinas, y junto a solidarios provenientes de las universidades y las centrales sindicales, Elías organizó un movimiento para recuperar las tierras y los pagos que los propietarios debían a los campesinos por los muchos años de trabajo.

Entre los activistas que trabajaron en la organización del movimiento estaban Mario Mullo y Rogelio Hauss, vinculados al movimiento de Monseñor Leonidas Proaño, además del profesor Abraham Flores, quien recién había empezado a trabajar en la escuela. Entre las organizaciones solidarias estaban la organización indígena Ecuador Runacunapac Riccharimui -ECUARUNARI- y el Frente Amplio de Izquierda -FADI-, cercano al Partido Comunista del Ecuador.

El proceso de organización fue difícil porque muchos de los huasipungueños habían sido expulsados de las tierras por el coronel Morales y hubo otros que optaron por huir, miedosos ante las amenazas del patrón. Algunos de los campesinos que abandonaron las tierras de la hacienda se fueron a Quito, mientras otros escaparon a las montañas de Pacto y Gualea, en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Eventualmente, algunos regresaron a Nono, motivados por movimientos posteriores a favor de la toma de tierras como el que ocurrió en Yanacocha y veremos más adelante.

La huída de los comuneros hizo que fracasara un primer intento de constituirse en comunidad y tener estatuto jurídico, lo que les hubiera permitido negociar con el coronel. Otra desventaja fue la salida del profesor de la escuela, que era uno de los más importantes aliados de la organización. A partir de 1970 los campesinos intentaron crear una pre-cooperativa y lograron reunir 800 sucres de aportes, aunque no pudieron legalizarse por la serie de requisitos que les pedían y porque tampoco tenían asesoría. Sin embargo, Elías Pailachu, mediante una asesoría jurídica a favor de él y de cuatro precaristas más, realizó los trámites para recibir una indemnización por los años de trabajo y en 1972, junto a los otros precaristas, logró conseguir "dos lomas" que se repartieron entre las cinco familias, que recibieron alrededor de 15 hectáreas de tierra cada una. A pesar de que las tierras estaban ubicadas en terrenos escarpados, permitieron ofrecer trabajo estacionario a los nuevos propietarios y a algunos de los otros comuneros de Alaspungo.

Sin embargo, la entrega de tierras a las cinco familias no fue suficiente para aquietar los ánimos y los trabajadores se plantearon el firme propósito de continuar en el empeño de organizarse para poder tomarse las tierras que les correspondían por los pagos no recibidos de su trabajo. De este modo, por segunda vez, hicieron los trámites para convertirse en comunidad como requisito para poder negociar las tierras de la hacienda, se empadronaron y lograron conformar una jurisdicción. Durante un largo tiempo, como comunidad, mantuvieron sesiones constantes cada quince días.

En una serie de negociaciones con el coronel, éste optó por venderles sus tierras, pero con una cotización muy superior al valor real. De acuerdo a Gerardo Pailachu, hijo de Elías y otro de los participantes de las movilizaciones de entonces, el coronel Morales les pedía 1' 300 000 mil sucres, cuando el avalúo real de las tierras era la décima parte, es decir, 130 000 sucres. En estas circunstancias maduró la idea de tomarse las tierras de la hacienda y el 1 de marzo de 1975 se adentraron a una hora de camino en las tierras del coronel, tumbaron unas cinco hectáreas de montaña, talaron el monte y tomaron la decisión de sacar todo el carbón posible para juntar la plata y pagarle al coronel el precio que ellos consideraron razonable.

El propietario no tardó en enterarse de la situación, los amenazó y logró enviar una patrulla con militares que constataron que la mayoría de los campesinos estaban tan adentro de la hacienda que era imposible tomarlos presos. Asimismo, comprobaron que el coronel era un ausentista, que no tenía ni mujer ni hijos, por lo que decidieron regresar a Quito. Posteriormente, Elías Pailachu y otros dirigentes fueron citados por abogados del coronel, y gracias al apoyo de los comuneros y de la solidaridad de distintas organizaciones que les hicieron préstamos y donaciones, lograron llegar a un acuerdo económico con el coronel, a quien pagaron finalmente 130 000 sucres por 500 hectáreas de tierra.

Los ex trabajadores tuvieron una experiencia de doce años de administración comunal de las tierras que consiguieron. Sin embargo, como veremos más adelante, se vieron enfrentados a situaciones estructurales: las difíciles condiciones de la tierra asignada, las restricciones a la explotación del carbón, el apareamiento de nuevas formas de endeudamiento con los bancos o con quienes controlaban el transporte y las incapacidades internas de administración de las tierras comunales. Todo esto contribuyó a una serie de condiciones que a la larga terminarían expulsando a la mayoría de habitantes de Alaspungo a las laderas del Pichincha.

## Alambi, la economía moral y la hacienda

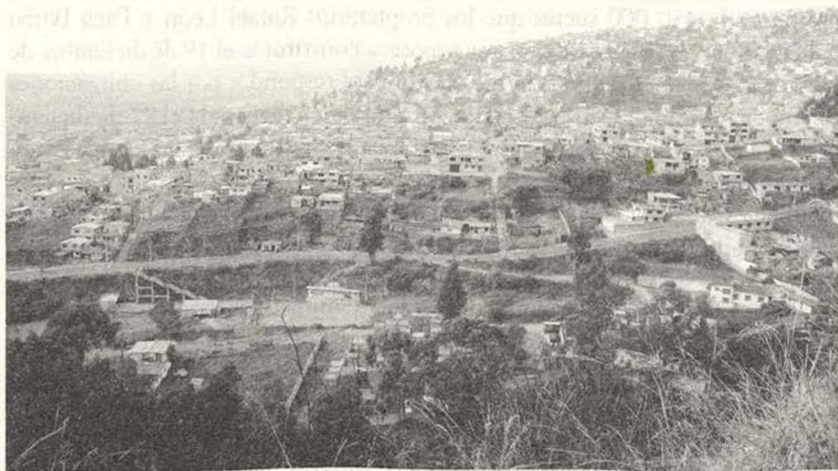
A diferencia de Alaspungo y Yanacocha, en la década de los setenta los trabajadores de la hacienda de Alambi entraron en una negociación con el sacerdote jesuita Santiago Agrediano. Este sacerdote era la cabeza visible de la administración de la hacienda que estaba en manos de la Compañía de Jesús. Según el testimonio del Padre Francisco Piñas, director del archivo y biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, el antiguo propietario de haciendas en Nono, Felipe Benavides, entregó a la fundación Jesuita Cornelia Pólit de Espinoza 270 hectáreas de unas tierras ubicadas en la zona de Alambi. En la versión de algunos de los comuneros de Alambi, la familia Benavides habría tenido problemas para pagar hipotecas a un banco y por esa razón dispuso de las tierras, las alquiló y luego las vendió a los jesuitas, representados por Santiago Agrediano. Este sacerdote iba regularmente a la hacienda pero vivía en Carcelén, adonde llevaba a algunos de los trabajadores de la hacienda, como también a otras propiedades de los jesuitas en la Armenia y Santo Domingo. Según el testimonio de José Ambas, Santiago Agrediano se lo llevó a trabajar a la Armenia siendo muy joven para ordeñar y producir leche, con el pretexto de que no se metiera en los problemas agrarios que empezaban a darse en Nono.

La hacienda había tenido pocos trabajadores que básicamente se dedicaban a la siembra de papas, limpiaban los potreros de la chilca, la mora y el zuro y metían pasto para el ganado que tenían los curas. Además, sembraban maíz, trigo, cebada y habas que eran llevados a Quito por Agrediano. Los trabajadores recibían un jornal de un sucre diario, además de la ración de alimentos que les entregaba el cura de lo que producía la hacienda, y no habían generado ninguna relación mercantil.

De acuerdo al testimonio de Manuela Ambas y de Segundo Sosa Ipo Santo, Santiago Agrediano decidió vender a los trabajadores de la hacienda 188 hectáreas por el valor de cinco millones y medio de sucres, bajo la condición de que los trabajadores se organizaran en una cooperativa. Inicialmente había solo cinco socios, pero se dieron cuenta que les era imposible pagar la suma pedida por Agrediano y decidieron conseguir otros socios para la cooperativa, hasta que llegaron a ser 14<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Como se puede ver, el precio que pagaron los ex trabajadores de Alambi fue significativamente mayor al precio que acordaron los comuneros en su negociación con otras haciendas.

Según Segundo Sosa, las negociaciones se concretaron en el año 1972 y a partir de entonces los ex trabajadores demoraron diez años en cancelar la suma requerida por Santiago Agrediano. Conformados como cooperativa y organizados con un sistema comunal, durante diez años hicieron sesiones continuas, sacaron productos a Cotocollao y si era necesario vendían una cabeza de ganado hasta cubrir la deuda contraída con el cura, quien salió de Alambi luego de hacer el contrato y no regresó nunca más. La hacienda fue adquirida mediante compra en 1972 por los campesinos que se habían organizado en una cooperativa. En ese entonces hubo una adjudicación a quince cabezas de familia que recibieron alrededor de doce hectáreas cada uno: José Miguel Ipo, Carlos Morales, José Manuel Ipo, Julio Santos, Amable Santos, José María Ipo, Camilo Santos, Pablo Ipo, Juan Santos, Segundo Sosa Ipo Santos, Melchor Collahuazo, José Alberto Cañar, Ángel Morán Ambas, José Antonio Ipo y José Manuel Lugaña. En el año 1975 se hicieron las escrituras y durante doce años los ex trabajadores administraron de manera comunal las tierras entregadas hasta que en 1984 decidieron parcelar las propiedades.



## Yanacocha, el ausentismo terrateniente y la organización campesina

La historia reciente de la hacienda de Yanacocha conforma un cuadro complejo en el que se superponen varios factores: el abandono de las tierras por parte de un hacendado ausentista, los intentos fraudulentos de los mayordomos y cuidadores de quedarse en posesión de la hacienda y una larga lucha emprendida por algunos ex trabajadores de la hacienda y sus descendientes junto a otros ex huasipungueros de haciendas adyacentes de la parroquia para acceder a unas tierras ecológicamente ricas.

La hacienda de Yanacocha fue comprada en 1943 por Rafael León Larrea, un político conservador que fue alcalde de Quito en 1952, a Luis Ernesto Dávila. La hacienda tenía más de mil hectáreas y los terrenos estaban ubicados entre los 3 200 y los 4 000 metros de altura, con pocas extensiones aprovechables para la agricultura. La hacienda fue abandonada prontamente por su dueño, quien salió del país motivado por sus actividades consulares. A esto se sumaron tres hipotecas: una con fecha 25 de enero de 1952, a raíz de un préstamo de 450 000 sucres que los propietarios Rafael León y Paca Barba habían hecho al Seguro Social; una hipoteca constituida el 19 de diciembre de 1955, inscrita el 21 del mismo mes y año para responder por las obligaciones contraídas con Juan Enrique Ortiz; y otra hipoteca registrada el 22 de diciembre de 1956 a favor de Ángel Viñán. Como resultado de las obligaciones incumplidas, la hacienda fue embargada el 7 de enero de 1959. Reportes sobre la situación de la hacienda durante la implementación del embargo mostraban que se hallaba en estado de abandono, carecía de sembríos, semovientes, herramientas e instalaciones. De acuerdo al testimonio de Abel Cañar, esta situación empeoró cuando la hacienda fue administrada por Ángel Viñán y por Manuel Coral. Con este último, los comuneros sostuvieron el más prolongado de los conflictos por la posesión de los terrenos de Yanacocha.

Don Abel Cañar, quien empezó a trabajar en Yanacocha bajo la administración de Viñán, recuerda que entonces todavía quedaban algunas herramientas, dos carros, un camión y bombas de fumigar que desaparecerían por la mala administración, al mismo tiempo que salían la mayoría de los trabajadores dejando la hacienda casi despoblada.

En la década de los sesenta surgió una fuerte disputa entre dos bandos que intentaron apoderarse de la hacienda: de un lado, la familia López, y del otro, Manuel Coral. De acuerdo a los testimonios de Abel Cañar y Luis Ipo, Manuel Coral era un cuidador designado por el Seguro Social. En acuerdo con él la familia López tenía en la hacienda reces en potreraje. Los López eran dueños de haciendas adyacentes y estaban interesados en ampliar sus propiedades. Cuando vieron que Coral estaba procediendo de manera ilegal con los terrenos de la hacienda, decidieron también apropiarse de la hacienda y para eso crearon una cooperativa familiar.

Manuel Coral había desarrollado un sistema precarista con pequeños propietarios de vacas de sectores como Marianitas y Calderón, a los que no solo cobraba el arriendo de las tierras, sino que también obligaba a trabajar para él hasta dos días a la semana. Cuando Coral descubrió los intentos de la familia López convocó a los arrendatarios y a otros campesinos del sector para que organizaran una pre cooperativa. Así aparecerían como sus trabajadores y él podría quedarse con las tierras. Cuando los campesinos descubrieron la intención tanto de la familia López como de Manuel Coral, decidieron que la pre cooperativa sería para luchar por sus propios intereses y empezaron a tener contactos con los otros movimientos que se estaban generando en las otras haciendas. Además, contactaron al abogado Alfredo Borja, quien los asesoró en la creación de la asociación. Los intentos de crear tanto la pre cooperativa como la cooperativa fallaron por razones administrativas, pero en el proceso de creación de la Asociación Pichincha, los trabajadores de la zona de Yanacocha conformaron un bloque que lucharía contra Manuel Coral hasta 1982, cuando el IERAC falló a favor de los campesinos.

Para crear la asociación se requería un mínimo de cuarenta socios, lo que obligó a convocar e incorporar a otros campesinos y campesinas de la región. Uno de ellos fue Luis Ipo, actual presidente de la asociación. El abuelo y el padre de Luis habían salido de Alambi en la época en que la hacienda pertenecía a los jesuitas, quienes los llevaron a trabajar a Tandayapa. Al dejar el trabajo con los curas, comenzaron una romería que los llevaría a Los Bancos y a Nanegalito, donde nació Luis. Sus padres habían sido carboneros y deambulaban porque no tenían tierra. Luis empezó a trabajar a la edad de quince años, luego de terminar la escuela. En Los Bancos su familia fue contratada para cuidar una finca y trabajaba también en una aserradora. Las condiciones laborales eran duras. Había bastante mano de obra disponible, por lo que el dueño de la finca ofrecía salarios bajos.

En esas condiciones se enteraron que en Yanacocha estaban solicitando socios para crear la Asociación Pichincha y decidieron enrumbarse para allá. En 1980, al cumplir sus veinte años, Luis llegó a Yanacocha con su familia. Allí se casó y continuó viviendo hasta la fecha desde inicios de los años ochenta, cuando ingresó con su familia a la asociación que hoy preside. Además de la familia de Luis Ipo, llegaron a formar parte de la asociación otros campesinos provenientes de Cotocollao, de Los Bancos y de otros barrios de Nono, pero la mayoría de los socios eran nativos de Yanacocha. El nomadismo de la familia de Luis Ipo estuvo vinculado al tratamiento desigual que Santiago Agrediano dio a los ex trabajadores de Alambi, como lo vimos en el acápite anterior, y su regreso a Nono se dio gracias a la convocatoria que estaba haciendo la asociación en su fase de constitución.

Cuando Luis Ipo llegó a Yanacocha, el conflicto con Manuel Coral estaba inclinándose a favor de los comuneros. En su testimonio, el cuidador Coral había sido desalojado de la casa comunal y "se atrincheró en una media-agüita arriba en Tablahuasi". Con el apoyo de la ECUARUNARI y la Pichincha Riccharimui, los comuneros terminaron apropiándose de las tierras, pero Manuel Coral quedó con unas ochenta hectáreas que terminaron compradas por la Fundación Jocotoco<sup>7</sup>.

Para poder oficializar la posesión de las tierras, la Asociación Pichincha tuvo que pagar las obligaciones que tenía la hacienda con el Municipio, como resultado de los impuestos acumulados. La hacienda de más de mil hectáreas, de las cuales unas 300 eran cultivables, había sido cotizada por el IERAC en 309 741,15 sucres y, según Abel Cañar, en 1977, el valor total al que se sumaron los impuestos y los intereses llegaba a 1' 860 000 sucres. El total que pagó la asociación fue de 750 000 sucres, cancelados en el transcurso de unos cuatro años.

Sin embargo, en las condiciones en las que se encontraban los campesinos, que a lo sumo tenían entre una y tres vacas por familia, no tuvieron más opción que explotar y sacar carbón de un bosque entero de polylepis de una montaña, lo que les valió una serie de amonestaciones del entonces Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre -INEFAM-. La explotación del bosque les permitió cancelar la deuda al desaparecido Instituto Ecuatoriano de la Reforma Agraria y Colonización -IERAC-.

En la repartición de las tierras, las familias recibieron cada una entre quince y veinte hectáreas y conservaron aproximadamente unas 300 hectáreas de tierras comunitarias.

<sup>7</sup> Como se puede ver, el precio que pagaron los ex trabajadores de Alambi fue significativamente mayor al precio que acordaron los comuneros en su negociación con otras haciendas.



## Hacienda La Merced, un conflictivo proyecto de las élites

Otra de las haciendas donde se produjeron complejos reajustes durante los años sesenta y setenta fue la hacienda La Merced. Allí se iniciaron transformaciones tempranas por el papel protagónico de los Bonifaz en la historia agraria de Pichincha (Barsky, 1984).

La hacienda La Merced fue entregada a Manuel Bonifaz Panisso el 8 de septiembre de 1929, como parte de las herencias recibidas de su abuela Josefina Ascázubi viuda de Bonifaz. La hacienda le correspondía a nombre de su fallecido padre Manuel Bonifaz Ascázubi. El otro heredero había sido Neptalí Bonifaz, el otro hijo de Josefina. Mientras Neptalí había recibido la hacienda de Guachalá, las partes altas de Ascázubi en San Milán, Carcelén y acciones del Banco del Ecuador, Manuel había recibido la parte baja de Ascázubi, comprendida entre la Avenida América y 18 de Septiembre, y otros terrenos más que comprendían las haciendas Ponciano, La Merced y El Carmen. Según testimonios de ex trabajadores de la hacienda, las herencias fueron motivo de disputas porque los patrones solían decir que en el repartimiento Manuel había salido perjudicado por ser huérfano de sus dos padres.

La hacienda tenía cerca de 2 800 hectáreas y en sus mejores momentos constituyó una de las más diversificadas empresas económicas que incluían la producción y distribución de productos derivados del trabajo agrícola y ganadero, la explotación de cal y bosques, así como de dióxido de carbono para bebidas gaseosas.

A principios de los años cuarenta Manuel Bonifaz se casó con Amelia Subercaseux, quien una vez instalada en la hacienda tomó las riendas de su dirección. Manuel Bonifaz Panisso era ingeniero agrónomo con formación en Italia y Francia, pero no ejerció su profesión y se dedicó a la escultura con jóvenes modelos que posaban en el estudio que tenía en su hacienda.

En la hacienda había un complejo sistema administrativo que incluía mayordomos, gerentes, tractoristas, mayoresales y gente de servicio como choferes, mientras que del lado de los trabajadores había huasipungueros, partidarios, yanaperos, huasicamas y trabajadores ocasionales que laboraban reclutados por los mayoresales en las épocas de cosecha, cuando se requería más mano de obra.

El número de huasipungueros cabezas de familia llegaba a unos veinticinco y cada uno tenía a su cargo trabajar por unos cuatro días a la semana. Además de trabajar en la hacienda, tenían “la obligación de dar a la mujer, (a) la muchacha hija hembra” para dedicarse a servicios en la hacienda. Los hombres, además de trabajar en la agricultura, el pastoreo y la ganadería, también tenían que hacer periódicamente trabajos de servicio en la casa de hacienda. Cuando entraban a cuidar el ganado debían estar internados en esa parte de la hacienda hasta por un mes, haciendo las funciones de huagracamac.<sup>8</sup>

Algunos huasipungueros habían llegado a recibir terrenos de hasta veinticinco hectáreas, que podían explotar con partidarios que trabajaban en sus tierras los días que estaban trabajando en las tierras de la hacienda. La producción que era trabajada por los partidarios en los terrenos de los huasipungueros era dividida entre ambos, en partes iguales. También la hacienda, cuando lo requería, contrataba partidarios. Otro de los sistemas de trabajo que había en la hacienda era el yanapa, consistente en la obligación que tenían los campesinos indígenas “libres”, de comunidades adyacentes como Pucará, de trabajar dos o tres días en la hacienda como compensación por tener que cruzar por la hacienda cuando se desplazaban hacia otros lugares.

Uno de nuestros informantes, Luis Oña, de unos setenta años, fue el chofer de toda la vida de la familia Bonifaz Subercaseaux. Su padre había nacido en Cumbayá y su madre era nativa de la hacienda La Merced. Era el menor de cinco hermanos. Cuando Luis tenía aproximadamente ocho años su padre falleció y Luis empezó a trabajar en la hacienda, cuidando terneros. La madre se había dedicado principalmente a la elaboración de quesos y mantequilla en la hacienda. A los quince años, a Luis le fue asignado el trabajo de tractorista, por el cual recibía un mensual de un sucre.

Cuando Luis era niño, y antes de que Amelia Subercaseaux se hiciera cargo de la administración de La Merced, dentro de la hacienda había una escuela hasta el tercer grado, con un profesor que venía de Quito. Según su testimonio, llegaron a haber hasta cuarenta y cinco estudiantes durante la jornada entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. Al terminar el tercer grado, los estudiantes por lo general entraban a trabajar a la hacienda, pero cuando Amelia asumió la dirección de ésta, tomó la decisión de cerrar la escuela. Así, algunos de los niños fueron directo a trabajar, mientras que otros intentaron continuar estudiando en Nono, adonde caminaban hasta tres horas a pie, y otros fueron a la escuela de Pucará.

---

<sup>8</sup> Cuidador del ganado, en quichua

Cuando Amelia llegó, a inicios de los años cuarenta, la hacienda estaba administrada por Ricardo León, quien estuvo a su cargo unos veintidós años, tiempo en el cual también se dedicó a administrar algunas de las propiedades que la familia tenía entre Cotocollao, la 10 de Agosto, la América y La Bolivia, hasta el mercado Santa Clara.

La hacienda tenía unas cien hectáreas destinadas exclusivamente a la producción agrícola. En ese entonces, las aproximadamente veinte familias huasipungueras sacaban hasta un camión semanal de habas, choclos, arvejas, melloco y zanahorias. De acuerdo al testimonio de Luis, una familia de huasipungueros anualmente podía llegar a sacar, entre otros productos, hasta unos 100 quintales de maíz, 60 quintales de papas y de arvejas, y unos 20 quintales de fréjol. Esta producción era comercializada por la misma hacienda, de donde salía en camiones hasta los mercados de Cotocollao o Santa Clara. Dentro de la hacienda también había trilladoras, máquinas para cosechar cebada y maíz y varios tractores que permitían un buen ritmo de producción que era comercializada en Quito.

En la hacienda La Merced se había desarrollado una economía moral que creaba los lazos entre los trabajadores y los propietarios. Uno de los mecanismos más eficientes para consolidar este nexo se daba en el contexto de las fiestas, especialmente las dedicadas a San Pedro y San Pablo los días 28 y 29 de junio, famosas no solo en la región sino en la provincia y también a nivel nacional. A las fiestas de San Pedro y San Pablo asistían no menos de 500 personas, muchas de las cuales venían de los barrios vecinos de Calacalí, Alaspungo, Yanacocha, Alambi y Guarumos, pero no faltaban visitantes de otras provincias, así como uno que otro turista internacional.

Las fiestas eran costeadas en parte por la hacienda y en parte por los huasipungueros. La tienda repartía hasta 300 litros de trago, unos cuarenta litros de leche, se mataban dos toros y se repartía la carne. Por su parte, los huasipungueros recibían adelantos y suplidos que llegaban a los 50 o 60 sucres, que les servían para comprar trajes y ropa para el diario y también adornos que utilizaban durante las fiestas. Además, los huasipungueros utilizaban parte de sus provisiones, como cuyes, chanchos y gallinas.

Durante las fiestas, las bandas de pueblo amenizaban los bailes y había corridas de toros con animales de la propia hacienda. Según el testimonio de Luis del Castillo, la hacienda llegó a tener unos 200 toros de lidia. Los concurrentes ayudaban a hacer los entablados para las corridas y, ya borrachos, manteaban a los toros.

Varios recibían golpes que formaban parte de las celebraciones. Muchos de los participantes pasaban la noche en la hacienda, donde caían borrachos, a veces en camas improvisadas entre la paja y el trigo del los mismos establos.

Las fiestas también son recordadas por los descendientes de los huasipungueros como Josefina Proaño, nieta de los ex huasipungueros Andrés Quishpe y Tránsito Quishpe. Josefina cuenta que los patrones ponían el mote y la chicha de jora. Para esta bebida se preparaba el maíz con meses de antelación, se le secaba y molía. En la fiesta hacían misa dentro de la hacienda, había disfraces y juegos como la vaca loca, con la que se iniciaban las vísperas de las fiestas. Había también juegos pirotécnicos, como la rueda y el chiguagua (un juego parecido a la vaca loca pero más pequeño), y a lo largo de toda la fiesta la señora Amelia festejaba con los trabajadores y ocupaba siempre el lugar más prominente.

En la Merced se había desarrollado un modelo de economía moral, con toda una pirámide de cercanías y lejanías a la propietaria, quien a su voluntad establecía favores o castigos a los trabajadores. La propietaria entregaba suplidos que, fuera del contexto de las fiestas, servían para que los campesinos compraran en Nono la ropa y la comida que no se producía en la hacienda, como arroz y panela. La mayoría de la comida la adquirían en la propia hacienda, donde había un molino que servía para sacar harina de maíz y de cebada, básica en la alimentación.

En esta época, por otra parte, también existieron importantes movilizaciones lideradas por los huasipungueros. De acuerdo al testimonio de Luis Oña, en los años cincuenta, durante la administración de Ricardo León, los huasipungueros realizaron un levantamiento porque no se les había entregado el dinero para conseguir unas herramientas de trabajo, lo que los obligó a usar sus propias herramientas. Esto se convirtió en un factor detonante que sirvió para que establecieran demandas sobre deudas que argumentaban que la hacienda tenía con ellos. Los huasipungueros pusieron un juicio que hizo que Ricardo León decidiera entrar a la hacienda con policías.

Éstos tumbaron las casas de los campesinos, quienes reaccionaron arrojándose de palos, piedras y machetes, dispuestos a defender sus predios de la furia del administrador. A los ocho días de estar atrincherados, volvió la policía disparando, lo que causó la muerte de uno de los campesinos. En todo este proceso, los campesinos estuvieron apoyados por un abogado de apellido Oleas, quien, al parecer, había sido inicialmente contactado por los propietarios de la hacienda y terminó como consejero legal de los campesinos.

En 1965, obligados por la Reforma Agraria de 1964, los Bonifaz decidieron hacer entrega de tres hectáreas a las familias de once huasipungueros, en pago por sus veintisiete años de trabajo. Además, se les dio derechos para pastar por cinco años tres cabezas de ganado en el sector La Prenda. Los beneficiados fueron Isabel viuda de Vilaña, Manuel Santamaría, Demetrio Chicaiza, Pascual Cargua, Rafael Moya Muñoz, Hilario Chicaiza, Andrés Quishpe, Rosa Quishpe y Rafael Cargua. Sin embargo, según Josefina Proaño, la entrega de los títulos no fue legalizada y hoy, a más de cuarenta y cinco años de la entrega, los pocos ex huasipungueros que quedan en La Prenda aún siguen bregando por legalizar sus pequeños terrenos.

La precaria situación en la que quedaron los ex trabajadores hizo que continuaran presionando para ampliar los beneficios que habían recibido de la hacienda y adelantando juicios contra los propietarios. Esto hizo que el IERAC exigiera varias veces la autorización para hacer inspecciones a favor de los campesinos. En 1970, alentados por los vientos de la Reforma Agraria, los campesinos lograron organizarse en una pre-cooperativa y durante un tiempo lograron impedir que la hacienda La Merced fuera enajenada, exigiendo que se les vendiera a ellos. Sin embargo, los propietarios movieron bien sus influencias y lograron levantar la prohibición a la vez que decidieron dedicar la hacienda exclusivamente a la producción lechera.

Durante su época lechera, la hacienda llegó a producir hasta 1.500 litros de leche diarios, de los cuales unos 300 eran dedicados a la cría de los terneros y los otros eran comercializados con las pasteurizadoras de Quito. Hacia mediados de los años setenta, el temor al levantamiento campesino hizo que el ánimo productivista diera paso a tendencias excéntricas de los propietarios: empezaron la importación de caballos árabes, para los que sembraban pastos, mientras la producción de leche bajó hasta 400 litros y se eliminó la producción agrícola. Entre los propietarios empezó a reinar la desconfianza hacia quienes tenían algún vínculo laboral con la hacienda, a la que venderían a mediados de los años ochenta. Paralelamente, los ex huasipungueros de la hacienda, asfixiados en sus tres hectáreas, empezaron el éxodo hacia Quito. Los pocos que quedaron envejecieron y esperan morir.

# La creación y disolución de las comunidades en Nono

## De la Asociatividad al Neoliberalismo en el campo

Luego de que los campesinos de Nono compraran porciones de terrenos a las haciendas de Alaspungo, Alambi y Yanacocha, administraron por un tiempo sus nuevas propiedades de modo comunal. Como vimos, en Alambi el cura Santiago Agrediano había puesto a los campesinos como condición para la venta de las tierras, que éstos crearan una cooperativa. Agrediano no hacía más que seguir las disposiciones estatales, que a través del IERAC promovían la explotación comunitaria de la tierra. En Alaspungo, los ex trabajadores se organizaron también de modo cooperativo para la compra de las tierras al coronel Morales, mientras que en Yanacocha, campesinos que habían tenido algún vínculo con los antiguos propietarios que habían abandonado la hacienda, junto a campesinos provenientes de otras regiones, crearon en 1977, la Asociación Pichincha para poder comprar las 1 000 hectáreas que se encontraban en disputa con los ex cuidadores y ex mayordomos de la hacienda. En el caso de la hacienda La Merced, a los ex trabajadores se les entregaron unos terrenos pequeños ubicados en zonas inaccesibles.

En este acápite, a través de los testimonios de ex huasipungueros y ex trabajadores, principalmente de Alaspungo y Alambi, se muestran algunas de las experiencias que marcaron el complejo proceso de administración de las propiedades comunales por parte de los ex trabajadores, así como las serias dificultades que tuvieron en mantener esas propiedades comunales. La lectura de estas experiencias se ubicará en el contexto de los actuales debates sobre la comunidad, que se estimulan por el nuevo contexto constitucional de Ecuador.

La comunidad constituye uno de los conceptos y prácticas más interrogados en la historia del pensamiento social latinoamericano y mundial y su vigencia política cobra un renovado vigor en las actuales condiciones del país, cuando la Constitución de 2008, definida como opuesta a los proyectos neoliberales, otorga un lugar central a la economía solidaria, en la cual la producción y distribución comunitaria ocupan un lugar determinante.

El papel de las economías solidarias en la nueva Constitución ecuatoriana se debe principalmente a las grandes movilizaciones lideradas por el movimiento indígena en las últimas décadas y al protagonismo político que este movimiento ha otorgado a la comunidad.

Las nuevas constituciones de varios de los países latinoamericanos están marcadas por las transformaciones que han ocurrido a partir de los años setenta y que señalan el paso del indigenismo al neoindigenismo (Figueroa, 2007).

La idea de comunidad tiene una rica trayectoria en el campo de las ciencias sociales y de izquierdas. Para algunos autores, marca el campo divisorio entre lo moderno y lo premoderno y remite a un análisis específico de las condiciones de los tipos de sociabilidad que constituyen a la modernidad burguesa (Tonnies, 1946; Durkheim, 1967; Weber, 2002). Al pensar en el campo de la izquierda, una larga y compleja trayectoria revela como la comunidad aparece como una de las construcciones políticas que más rivaliza con el individualismo de raíces liberales. Estas complejas tradiciones de los países latinoamericanos, con una significativa presencia de población indígena, en las últimas décadas han pasado de una retórica de inclusión de los indígenas al Estado Nacional a un énfasis en la diferencia constitutiva de los indígenas frente a la nación. En este proceso el concepto de comunidad ha jugado un papel fundamental (Figueroa, 1997).

En la actual Constitución por primera vez se habla de derechos colectivos y se da igual importancia a los derechos de los individuos y de las comunidades. El capítulo 4 de la Constitución está íntegramente dedicado a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a los que se reconoce como entes autónomos del Estado, con una gama de derechos que van desde aspectos identitarios y culturales hasta la conservación de tierras comunales que se definen como inembargables, inalienables e indivisibles. De otro lado, en el artículo 61 "... se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial" (Constitución del Ecuador, 2008: 29).

En la Constitución actual, a las comunidades, al igual que a los pueblos y nacionalidades, se les otorga importantes niveles de autonomía, pero siempre concebidos como parte de un Estado indivisible. De igual manera, tienen una serie de derechos: mantener, desarrollar y fortalecer su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Asimismo, se les previene del racismo y la discriminación, se les da derecho a la preservación de tierras comunitarias, a la participación en el uso, administración y conservación de los recursos naturales que estén en sus tierras, al manejo ambientalista de los mismos, a tener formas de autoridad propias, al manejo de su patrimonio histórico, a practicar el derecho consuetudinario, a construir organismos que las defiendan, y se reconoce la propiedad colectiva de la tierra como forma ancestral de organización territorial (Constitución del Ecuador, 2008).

Las comunidades cumplen también un papel fundamental en el capítulo de la Constitución dedicado a la soberanía económica. El sistema económico, definido como social y solidario, incluye las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. Cuando se habla de economía popular y solidaria se incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Constitución del Ecuador, 2008: 99). Todas estas condiciones y expectativas que abre la nueva Constitución ecuatoriana motivan a actualizar los debates en torno a la noción de comunidad.

Un importante antecedente de las actuales comunidades es la ley de comunas de 1937, que a decir de Chiriboga (1984) y Martínez (1992) convirtió a las comunidades en las unidades administrativas mínimas del Estado y buscaba legalizar las relaciones de las familias comuneras y sus vínculos con el exterior. La ley de comunas fue una herencia del liberalismo y tuvo un impacto más profundo en las denominadas comunidades libres (Figuroa, 1997). La participación del campesinado de la Sierra en la Revolución Liberal permitió que se tomaran algunas medidas como la supresión del diezmo, la ley de beneficencia pública de 1908 y la abolición del concertaje en 1918. Aunque las conquistas campesinas serían prontamente neutralizadas mediante la renovación de instituciones neocoloniales, como sucedió en el caso del huasipungo, la Revolución Liberal abrió un escenario de disputas que obligó a redefinir el lugar de los indígenas campesinos en la nación. En esta disputa la izquierda jugó un papel protagonista desde muy temprano (Coronel, 2010; Becker y Tutillo, 2009; Ibarra, 2006) y la comunidad ocupó un lugar importante.

De acuerdo con Martínez, la ley de comunas influyó los debates y las prácticas sobre la comunidad hasta 1964, cuando se produjo la primera Reforma Agraria. Luego, entre 1964 y 1975, los principales debates estuvieron determinados por los procesos de Reforma Agraria de ese periodo. Entre 1975 y 1992 hubo una notable influencia de los discursos del desarrollismo y más tarde se empezaron a privilegiar las asociaciones, que comparadas con las comunidades implican menos compromisos y trámites<sup>9</sup>.

Por su lado, Víctor Bretón ubica el desarrollismo a partir de 1955, una fecha mucho más temprana que la que establece Martínez, y a partir del desarrollo comunitario rastrea el papel protagónico que tuvieron las comunidades en los proyectos, para los que eran concebidas como el factor de entrada de las innovaciones tecnológicas, las nuevas formas de producción y comercialización, así como los servicios (Bretón, 2001).

<sup>9</sup> La asociación es una persona de derecho privado constituida por al menos cinco campesinos, considerando como tales a quienes trabajan habitualmente la tierra por cuenta propia y sin uso habitual de mano de obra por fuera del círculo familiar (Martínez).



Actualmente nos encontramos con un escenario contradictorio: como resultado de las movilizaciones neo-indigenistas, las comunidades cumplen un importante papel como referente de opciones políticas y económicas de tipo post-neoliberal, pero al mismo tiempo sufren un gran deterioro interno, vinculado al desplazamiento del campesinado hacia las ciudades, y a las transformaciones estructurales que ha sufrido el espacio rural en las últimas décadas (Burch, 2007).

De otro lado, en la historia de la izquierda internacional ha habido traumáticas experiencias en los procesos de colectivización forzosos. Dado que un análisis de estas experiencias va mucho más allá de los límites del presente acápite, solo cabe señalar un reciente trabajo (Figueroa, 2009) sobre cómo las ambiguas posiciones de la izquierda colombiana respecto a las dimensiones individuales y colectivas del campesinado en la década de los setenta ha sido uno de los factores clave en la irrigación de la violencia política en el Caribe colombiano.

Uno de los problemas fundamentales del Caribe tuvo que ver con las aspiraciones de los campesinos en torno al reclamo de créditos, así como de la modernización de las relaciones sociales en el campo, que cuestionaban expresiones idiosincráticas del poder local. Los campesinos del Caribe colombiano develaron la sui géneris combinación entre tradicionalismo paternalista y la represión descarada que implementaban los latifundistas. Por su parte, la izquierda colombiana fue incapaz de apoyar al campesinado porque las demandas de modernización que hacía este sector partían de unas premisas que se oponían a los rasgos de tradicionalismo y comunitarismo que la izquierda establecía como esenciales de las economías y de la “cultura campesina”.

La idea central que guía este capítulo es que la comunidad no es ninguna opción “natural” de las economías campesinas o las economías indígenas. La comunidad solo puede reconocerse como una opción política a través de una permanente discusión y evaluación entre los miembros que participan de ella. La fundación de Nono y el fracaso de las comunas enseñan que hay problemas estructurales y coyunturales que tienen que ser permanentemente llevados a la esfera pública y ventilados en los grupos sociales, cuando estos se comprometen a crear y a mantener experiencias comunitarias.

En este trabajo, a través de las experiencias políticas que vivieron los campesinos de Alaspungo y Alambi de la parroquia de Nono, se pondrán en cuestionamiento las perspectivas esencialistas que asocian el comunitarismo con el campesinado indígena. Los campesinos y campesinas de Alaspungo y Alambi fracasaron en el intento de crear asociaciones colectivas y de administrar de manera comunitaria las tierras que consiguieron en el contexto de las adaptaciones que emprendió la hacienda antes y durante las reformas agrarias de los años sesenta y setenta.

A partir de una etnografía dialógica y crítica se indagó con los propios protagonistas cuáles fueron las razones por las cuales las experiencias comunitarias fracasaron y se pudo percibir cómo la confluencia de razones culturales y estructurales convirtió en inviable al modelo comunitario.

Como concluiremos de manera tentativa, la construcción de modelos comunitarios viables presupone al menos la voluntad política de los involucrados, el ejercicio de la evaluación y la crítica permanente, junto al diseño de mecanismos que permitan superar los obstáculos estructurales para la creación y mantenimiento de la comunidad. El criterio central que guía el siguiente capítulo es que las opciones comunitarias no se pueden asignar de manera esencial a ningún sector social, sino que más bien son opciones políticas que deben ser negociadas y renegociadas de manera permanente (Figuroa, 1997).

## Las comunidades en Alaspungo y Alambi y su disolución: Enseñanzas políticas de un proceso

Los campesinos de Alaspungo y Alambi crearon formas organizativas comunitarias que tuvieron un ciclo de auge y disolución, debido a una serie de causas, algunas de tipo estructural, y otras que muestran las difíciles condiciones en las que tuvieron que negociar luego de la Reforma Agraria.

En Alaspungo en 1975, los campesinos formaron una comunidad retomando algunas de sus prácticas sociales, pero principalmente para responder a los requisitos establecidos en las leyes de Reforma Agraria de 1964 y 1973, que planteaban dentro de sus objetivos la “integración del minifundio”. Estas leyes establecían que los minifundios debían integrarse con el objeto de constituir “unidades agrícolas de escala económica”, lo que buscaba, al menos teóricamente, crear una economía campesina que fuera competitiva en las nuevas condiciones a través de la reunión de varios minifundios. De este modo los campesinos integraron los minifundios en comunidades o cooperativas, que eran las únicas instancias con las que el Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria podía negociar.

En 1972 los campesinos habían hecho el primer intento de crear una pre-cooperativa. Este intento no prosperó, entre otras razones por la incapacidad de los campesinos de responder a todas las exigencias burocráticas para la creación y el reconocimiento de la organización campesina. En rigor, los trámites administrativos fueron una dificultad desde el principio, pues requerían cédulas o certificados de nacimiento que muchos no tenían, por lo que no se podían reconocer legalmente sus cooperativas o comunidades. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la comunidad fue reconocida en 1975, y su existencia real se prolongó hasta 1982, aunque su existencia jurídica aun continúa.

Los siete años de existencia de la comunidad de Alaspungo constituyen una experiencia que arroja elementos empíricos útiles para debatir sobre el papel actual de la comunidad en un contexto en el cual ésta es una organización económica y política con un peso específico en la Constitución de 2008. Asimismo, para ver algunas de las perspectivas y dificultades, no solo de los modos de organización social que plantean las economías campesinas, sino principalmente para reconocerlas como una opción política que eventualmente pueda constituirse en una alternativa al modelo neoliberal.

En este trabajo, a través de las experiencias políticas que vivieron los campesinos de Alaspungo y Alambi de la parroquia de Nono, se pondrán en cuestionamiento las perspectivas esencialistas que asocian el comunitarismo con el campesinado indígena. Los campesinos y campesinas de Alaspungo y Alambi fracasaron en el intento de crear asociaciones colectivas y de administrar de manera comunitaria las tierras que consiguieron en el contexto de las adaptaciones que emprendió la hacienda antes y durante las reformas agrarias de los años sesenta y setenta.

A partir de una etnografía dialógica y crítica se indagó con los propios protagonistas cuáles fueron las razones por las cuales las experiencias comunitarias fracasaron y se pudo percibir cómo la confluencia de razones culturales y estructurales convirtió en inviable al modelo comunitario.

Como concluiremos de manera tentativa, la construcción de modelos comunitarios viables presupone al menos la voluntad política de los involucrados, el ejercicio de la evaluación y la crítica permanente, junto al diseño de mecanismos que permitan superar los obstáculos estructurales para la creación y mantenimiento de la comunidad. El criterio central que guía el siguiente capítulo es que las opciones comunitarias no se pueden asignar de manera esencial a ningún sector social, sino que más bien son opciones políticas que deben ser negociadas y renegociadas de manera permanente (Figuroa, 1997).

## Las comunidades en Alaspungo y Alambi y su disolución: Enseñanzas políticas de un proceso

Los campesinos de Alaspungo y Alambi crearon formas organizativas comunitarias que tuvieron un ciclo de auge y disolución, debido a una serie de causas, algunas de tipo estructural, y otras que muestran las difíciles condiciones en las que tuvieron que negociar luego de la Reforma Agraria.

En Alaspungo en 1975, los campesinos formaron una comunidad retomando algunas de sus prácticas sociales, pero principalmente para responder a los requisitos establecidos en las leyes de Reforma Agraria de 1964 y 1973, que planteaban dentro de sus objetivos la “integración del minifundio”. Estas leyes establecían que los minifundios debían integrarse con el objeto de constituir “unidades agrícolas de escala económica”, lo que buscaba, al menos teóricamente, crear una economía campesina que fuera competitiva en las nuevas condiciones a través de la reunión de varios minifundios. De este modo los campesinos integraron los minifundios en comunidades o cooperativas, que eran las únicas instancias con las que el Instituto Ecuatoriano para la Reforma Agraria podía negociar.

En 1972 los campesinos habían hecho el primer intento de crear una pre-cooperativa. Este intento no prosperó, entre otras razones por la incapacidad de los campesinos de responder a todas las exigencias burocráticas para la creación y el reconocimiento de la organización campesina. En rigor, los trámites administrativos fueron una dificultad desde el principio, pues requerían cédulas o certificados de nacimiento que muchos no tenían, por lo que no se podían reconocer legalmente sus cooperativas o comunidades. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la comunidad fue reconocida en 1975, y su existencia real se prolongó hasta 1982, aunque su existencia jurídica aun continúa.

Los siete años de existencia de la comunidad de Alaspungo constituyen una experiencia que arroja elementos empíricos útiles para debatir sobre el papel actual de la comunidad en un contexto en el cual ésta es una organización económica y política con un peso específico en la Constitución de 2008. Asimismo, para ver algunas de las perspectivas y dificultades, no solo de los modos de organización social que plantean las economías campesinas, sino principalmente para reconocerlas como una opción política que eventualmente pueda constituirse en una alternativa al modelo neoliberal.

Reiteremos que a partir de 1975, en Alaspungo la comuna tuvo dos momentos: un periodo de existencia real que se prolongó entre 1975 y 1982, cuando los campesinos distribuyeron las responsabilidades comunes sobre el trabajo y ciertos excedentes de las actividades económicas de las familias, y un segundo momento, que se da a partir de 1982, cuando la comunidad "real" es disuelta por disposición de los propios campesinos, pero continúa su existencia jurídica hasta la actualidad. Según los testimonios, en la época de existencia "real" de la comunidad la producción económica estuvo articulada principalmente en torno a la extracción de carbón, mientras que las actividades agrícolas se realizaban de modo subsidiario.

En el caso del barrio de Alambi, los campesinos tuvieron una experiencia comunal de unos diez años, entre principios de los años setenta hasta los ochenta. Casi todos los testimonios coinciden en señalar que en este caso la comunidad existió hasta el momento en que pagó a Santiago Agrediano, un cura que aparecía como representante de la compañía de Jesús, propietaria de los predios, el precio acordado sobre las 240 hectáreas que conformaban la hacienda de Alambi.

La experiencia de los campesinos de Alaspungo y Alambi muestra que hubo ciertos momentos en los que el trabajo y la organización comunitaria fueron el mejor modo de responder a sus necesidades. Los testimonios permiten identificar circunstancias en las cuales la distribución comunitaria de excedentes no solo evita que se pierdan productos, lo cual es una irracionalidad en contextos de visible escasez, sino que también permite crear obligaciones que se reclaman cuando es necesario. En los testimonios también se muestra que una parte importante de las transacciones entre grupos familiares se hace de forma no monetaria, lo que permite que crear obligaciones que son cobradas a lo largo del tiempo. Sin embargo, los acuerdos de compartir obligaciones son voluntarios y episódicos, aunque los beneficios que producen sean evidentes.

De acuerdo a Manuela Ambas, de Alambi, en muchas ocasiones los comuneros pierden cosechas por no contar con manos suficientes. En otros casos, los comuneros trabajan conjuntamente para resolver problemas urgentes, como defenderse de las ardillas, muy aficionadas a comerse los zapallos. En estos casos, grupos familiares trabajan y se reparten ciertos excedentes de las cosechas de los zapallos, mientras la otra parte es comercializada por la familia propietaria de la cosecha.

El trabajo comunitario se convierte en la mejor alternativa cuando se siembra y se cosecha en cantidades relativamente grandes. Los compromisos colectivos consistentes en el trabajo que grupos familiares hechos en los terrenos de otras familias son conocidos como “prestamos” y se devuelven con la distribución de partes de la cosecha a los trabajadores, o se devuelve el favor cuando sea requerido por parte de quienes han ayudado previamente.

En Alaspungo, en la época de la comunidad, semanalmente los comuneros hacían mingas para desbrozar los potreros, para sembrar y poner ahí el ganado comunal, así como también para construir los hornos y hacer carbón. Según los testimonios de Emiliano y Teresa Ramos, los trabajos en los terrenos comunales se hacían los viernes con mingas semanales.

El producto recibido del carbón era familiar y dependía de la recolección de madera que hiciera cada uno. Además se sembraban y repartían papas, habas y mellocos. La producción del carbón servía para conseguir algo del capital que necesitaban para poder pagar los costos de los terrenos adquiridos por la compra de la hacienda San Eloy, mientras que la producción agrícola satisfacía en parte las necesidades de consumo interno. La producción agrícola interna fue fundamental en el periodo de existencia de la comunidad. El dirigente Elías Pailachu sostiene que la comunidad se mantuvo mientras hubo niveles de producción relativamente buenos. Esto sucedió antes de que se empezaran a sentir los efectos de la esterilización del suelo derivada del uso irracional de químicos que se inició a gran escala en la década de los ochenta. Todos los testimonios recogidos en Nono ratifican el proceso que caracteriza la entrada de los agroquímicos: un aumento inicial de productividad y un ciclo posterior de caída de esta productividad, lo que obliga a un aumento del consumo de fertilizantes y agroquímicos, hasta que al fin la tierra entra en un franco proceso de esterilización (cfr. Burch, 2007).

La comunidad también mantuvo su existencia gracias a cierto apoyo que recibía del Estado. Según varios testimonios, el Ministerio de Agricultura entregaba durante las mingas alimentos como carnes enlatadas, azúcar, arveja y fréjol, que eran consumidos en los almuerzos durante las mingas comunales.

Sin embargo, como ya ha sido señalado por Martínez (2006), en rigor las estructuras familiares estaban por encima del modelo comunal y sobre ellas recaía la verdadera acción comunal. Esto se reflejaba en la forma como se organizó el trabajo en la comunidad en Alaspungo. Para la extracción de carbón, cada familia se organizaba de acuerdo al número y disponibilidad laboral de sus integrantes. Así, las familias que tenían más miembros en edad productiva sacaban mayor cantidad de carbón.

El beneficio que llegaba a la comunidad resultaba de una especie de impuesto que entregaban las familias por cada bulto de carbón que producían. De acuerdo a los testimonios de Elías Pailachu y Emiliano Ramos, el monto era de cinco reales por mula. El resto era vendido por las propias familias para sus propios ingresos. Lo mismo ocurría con la producción agrícola, de la que se pagaba un precio por cantidad extraída.

El hecho de que la responsabilidad y los beneficios recayeran en las unidades familiares permitía el surgimiento y consolidación posterior de diferencias al interior de la comunidad. Desde los inicios de la comunidad, estas diferencias estaban dadas no solo por la cantidad de miembros disponibles para el trabajo en las unidades domésticas, sino también porque algunos de los campesinos poseían tierras en Alaspungo o en lugares adyacentes, que fueron adquiridas en otros momentos o en otras circunstancias.

Por ejemplo, Elías Pailachu había recibido unas tierras como indemnización por su trabajo de mayordomo. Además, seguramente también fueron importantes los intentos del propietario de la hacienda de generar divisiones entre los campesinos mediante el favorecimiento de unos trabajadores y el desconocimiento de otros. Cuando las tierras comunales fueron entregadas, Elías se encontró con que tenía que destinar tiempo al trabajo en sus propias tierras y una parte al trabajo en las tierras comunales. De acuerdo con su testimonio, el hecho de que tuviera que dedicar la mayor parte de su tiempo a administrar sus propias tierras causaba fricciones entre los comuneros. Algo parecido ocurrió en el caso de Emiliano Ramos, otro dirigente que unos años antes había recibido unos terrenos de la hacienda Chiquilpe, adyacente a San Eloy, como parte de sus derechos como huasipunguero y también por los más de veinticinco años que su padre había trabajado en esa hacienda.

Otra dificultad que experimentaron los campesinos como comunidad fue que al no poseer escrituras individuales se encontraron con serias dificultades para el acceso a créditos que les permitieran aumentar su producción o sus animales. Las ambigüedades y contradicciones administrativas y jurídicas impidieron que los comuneros accedieran a créditos cuando lo requerían: se les solicitaban escrituras individuales cuando un requisito para haber recibido las tierras era haberse conformado como asociación o comunidad. Esta dificultad administrativa muestra otro de los límites de las reformas agrarias de 1964 y 1972, que priorizaron la conformación de formas de propiedad corporativa o comunal como mecanismo de evitar la fragmentación inherente al minifundismo y una competencia inequitativa entre las comunidades y las eficientes unidades productivas que conformaban el núcleo de las haciendas modernizadas.



. Sin embargo, a la postre esto terminó convirtiéndose en un impedimento para los propios campesinos, como se ve en los testimonios de los propios ex trabajadores de la hacienda de San Eloy. De acuerdo con Gerardo Pailachu, las dificultades en el acceso a los créditos bloquearon la ejecución de varios proyectos que eventualmente podrían haber beneficiado a las familias. Las ayudas que pudieron canalizar solo fueron para el mejoramiento de las escuelas o la construcción de las casas comunales.

Las dificultades en el acceso a circulante implicaron no solo que la comunidad estuviera condenada al fracaso en su viabilidad económica, sino que además las mismas familias campesinas estuvieran imposibilitadas de mejorar sus ingresos y acceder a un capital que les permitiera competir en mejores condiciones con los distintos agentes que las acechaban. En estas condiciones empezaron a darse relaciones precaristas con nuevos agentes económicos, análogas a las que existían en el periodo de la hacienda. Así, la fragilidad económica de las comunidades y de las unidades familiares fue aprovechada por comerciantes y dueños de camiones que empezaron a hacer préstamos personales a los campesinos y que a través del endeudamiento impusieron las condiciones en el pago del carbón y de los productos agrícolas que sacaban a mercados fuera de Nono.

De acuerdo con Emiliano Ramos, durante el tiempo de la producción comunal, semanalmente llegaban a sacar 200 mulas de carbón que se vendían a un solo comerciante, el propietario de un camión que imponía sus propios intereses en las negociaciones. Entre el comerciante y los comuneros se desarrollaron formas de endeudamiento iguales a las que se daban en la época de la hacienda, ya que el propietario del camión entregaba "adelantos" en plata que endeudaron a los comuneros y los obligaba entregar el carbón solo a él. Esta situación colocaba a los comuneros en condiciones de desigualdad a la hora de negociar el precio del carbón. Dado que las transacciones entre el comerciante y los campesinos eran relaciones individuales y que la gran mayoría de los campesinos tenía muy poco capital, éstos terminaron sometidos a la voluntad del prestamista. Durante el propio proceso de distribución y comercialización de los productos que sacaban de la hacienda empezaron las dificultades e incluso continuaron prácticas que eran comunes durante la dominación de la hacienda.

Otra razón estructural de la disolución de la comunidad fue el crecimiento del ganado y la expulsión de gente que se produjo por la expansión ganadera. Los comuneros habían acordado que cada familia tuviera cuatro cabezas de ganado, pero este acuerdo no fue respetado por quienes vieron crecer sus capitales y consideraron que la mejor inversión era comprar más cabezas de ganado.

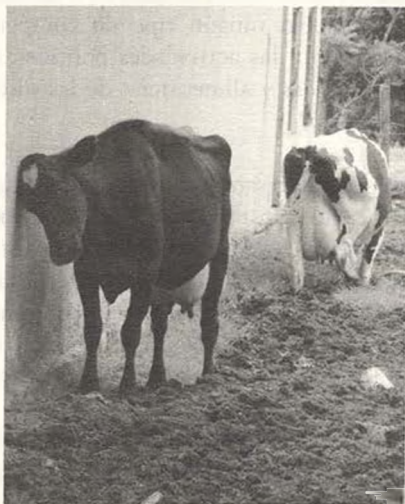
Según el testimonio de Emiliano Ramos, los campesinos escogieron la producción ganadera en vez de la agrícola porque querían “copiar a las haciendas”. Lo cierto es que en Nono, las haciendas venían haciendo experimentaciones exitosas con el ganado desde principios del siglo XX y esa práctica se expandió luego de los procesos de Reforma Agraria. En ese momento, los hacendados vieron que con una adecuada tecnificación y con el uso de los mejores pastos se podían deshacer de la mano de obra campesina y tener hatos de más de quinientas vacas, de las cuales una sola podía llegar a producir hasta veinticinco o treinta litros de leche diarios con solo tres o cuatro trabajadores en las haciendas.

La ganadería representó una importante vía económica de capitalización para los medianos hacendados y la tecnificación les permitió resolver el problema de la presión campesina. Por su lado, para los campesinos el modelo ganadero era digno de imitar, aunque muy pronto verían que sin créditos para el mejoramiento de los pastos ni una tecnificación adecuada, sus niveles de ganancia serían incomparablemente menores a los de los hacendados. Los campesinos, propietarios de tres, cuatro o cinco hectáreas, pronto se vieron obligados a aumentar sus terrenos para mantener o incrementar sus pequeños rebaños de unas vacas que producían entre tres y cuatro litros de leche diarios.

En estas circunstancias los campesinos empezaron a presionar para aumentar sus terrenos y los que estaban en mejores condiciones económicas lograron ampliar sus propiedades mediante compras que no necesariamente fueron legales, ya que existían vacíos en la titulación y restricciones oficiales a la compra y venta de propiedades entregadas comunalmente.

En todo caso, la presión de los pequeños propietarios por ampliar sus propiedades fue un factor fundamental del debilitamiento de la propiedad comunal.

Hay otra serie de razones de tipo moral por las cuales la comunidad fracasó, al igual que en otros ejemplos de la región. A partir de una exploración etnográfica con un grupo indígena del Caribe colombiano (Figuroa, 2009), inmerso en un proceso de radical mestización (Reichel y Reichel, 1961),



se puede ver cómo las herencias neocoloniales en gran medida predisponen a que los campesinos que han sufrido los rigores de la dominación hacendaria y latifundista negocien sus intereses económicos y políticos en un ámbito lleno de restricciones, vergüenzas y ocultamientos propios de una economía de prestigio.

A diferencia de una serie de teóricos que consideran que la economía moral resulta de las estrategias de comunidades que buscan el mantenimiento de la igualdad social, rechazando el apareamiento de diferencias económicas y sociales, en el caso de Nono, los propios campesinos de los distintos barrios reconocen los rasgos de la economía moral como un serio impedimento para establecer acuerdos económicos y políticos que hubieran podido garantizar la continuidad de las comunidades. Así, la economía moral más bien es recreada por las propias instituciones neocoloniales, como las haciendas y los poderes locales, para reforzar las asimetrías entre los campesinos y esos poderes. En Nono, la reproducción de la economía moral convirtió en inviable a la comunidad y contribuyó a su disolución, al evitar que se establecieran y cumplieran acuerdos encaminados a hacer confluir los intereses individuales y colectivos en lo comunal.

Hay algunas experiencias en las cuales se manifiesta la economía moral a expensas de la experiencia comunitaria: las dificultades en establecer acuerdos en los trabajos colectivos de las mingas; la falta de cumplimiento en los compromisos económicos derivados del acceso a créditos en las tiendas comunitarias; la ausencia de una valoración económica del trabajo político de los líderes de los barrios, quienes a lo sumo podían adquirir cierto prestigio pero no recibían ningún tipo de compensación económica durante el tiempo dedicado a las actividades políticas; el desconocimiento de las necesidades económicas y alimenticias de las distintas familias, por considerarse asuntos privados.

Lo interesante en todos estos problemas, como veremos, es que lejos de haber sido afrontados de manera pública y deliberada, fueron llevados al plano del chisme y del rumor, inhibiendo así el establecimiento de pactos que permitieran superar los desafíos inherentes a la convivencia colectiva. Simultáneamente, los entrevistados reconocieron la necesidad de que estos asuntos fueran ventilados de otro modo, en sus espacios públicos, a la vez que expresaron que nunca habían debatido sobre esa posibilidad.

En el caso de Alambi, Manuela Ambas habla con plena convicción de que en los trabajos colectivos hay algunos que evaden sus responsabilidades a la vez que tratan de sacar el mayor provecho posible en el acceso a los beneficios.

En su testimonio sostiene que cuando se hace la recolección de la papa y se acude al “prestamanos”, a las mingas y al chugchir, las familias que llegan primero recogen las mejores papas y las esconden para después llevárselas a sus casas. Por estas razones dice que se presentan varios conflictos entre las familias en épocas de cosecha. La misma Manuela Ambas, quien antes de radicarse definitivamente en Alambi vivió un tiempo en Alaspungo, recuerda que allí participó en proyectos colectivos de crianza de pollos que terminaron desastrosamente, ya que por la “fortuna” o por la desidia, algunas familias no podían administrar el negocio con tanto éxito como otras, lo que generó fuertes fricciones e hizo que los proyectos fracasaran. Asimismo, en Alaspungo Emiliano y Teresa Ramos cuentan que muchos de los habitantes del barrio presionan para que les fíen productos que no pagan, al igual que varios de los jóvenes habitantes de las laderas del Pichincha y descendientes de los comuneros, que cuando llegan de Quito fíen alcohol y cervezas y se toman mucho tiempo en pagar, si acaso lo hacen.

Quienes han sido líderes de los barrios cuentan con cierto desencanto que las actividades políticas acarrearán una serie de compromisos y reuniones que los hacen alejarse con frecuencia de sus barrios y abandonar el trabajo de sus terrenos, sin que haya nadie que los reemplace. En muchos casos los desplazamientos a Quito tienen que costearlos ellos mismos, lo que quita mérito a su actividad política y los posibles beneficios que podrían derivarse hacia la comunidad.

Finalmente, los testimonios muestran que las familias desconocen la situación alimentaria de las demás, y por lo tanto no saben qué productos podrían producir y circular comunalmente para garantizar una dieta relativamente equilibrada. Al hablar del tema alimenticio las familias saben que hay un gran déficit, pero lo conciben como un asunto privado, lo que inhibe la posibilidad de establecer acuerdos a favor del bien general de la comunidad.

Como vimos, las causas del fracaso de las comunidades se debieron a factores estructurales como el tamaño de los terrenos, que eran insuficientes en una economía ganadera, o por razones morales, como el acceso inequitativo al trabajo y a la distribución de los beneficios, lo que no se discutía públicamente, sino que era ventilado en la esfera del chisme y el rumor.

A continuación se muestran las consecuencias de la disolución de las comunidades en Nono y cómo esta experiencia da algunos elementos que permiten considerar al trabajo comunitario como un proyecto para el beneficio social.

## La comunidad como reto político

La experiencia de los campesinos de Nono nos muestra que la comunidad no es un modelo inherente ni a la lógica campesina ni a las lógicas indígenas. Lo que nos muestra esta experiencia es que para que las comunidades existan se requieren algunas condiciones que permitan resolver tanto las causas de los problemas detectados en un orden estructural, como aquellas de un orden más sociopolítico y cultural, que hemos denominado moral. En términos generales, la comunidad es un proyecto político que debe estar sometido a un escrutinio y a una evaluación permanente, lo que presupone la construcción de una esfera pública popular.

Sin embargo, la construcción de una esfera popular que discuta el papel político de las comunidades implica una constante disputa con una serie de legados que han contribuido a su inhibición o a su debilitamiento: por un lado, una larga tradición colonial y neocolonial en la que los sectores subalternos han sido definidos como sujetos incapaces de auto representarse y necesitados de tutoría. Por otro, el centralismo de distintas tendencias de la izquierda, que sustituyen las dinámicas populares por las decisiones de los burócratas de los partidos, lo que ha tenido trágicas consecuencias en la historia del socialismo. También están los legados neoliberales vigentes que se caracterizan por una sistemática privatización de los espacios públicos.

En el caso de Nono, estos legados han tenido una expresión radical a través de la expulsión de la población trabajadora a los espacios marginales de Quito, el envejecimiento de la población local y la desarticulación de las experiencias políticas de los ex huasipungueros y ex trabajadores de las haciendas.

Discutir desde las esferas públicas populares el papel de las comunidades presupone una crítica radical a los legados de las vanguardias, que desde perspectivas románticas atribuyen de manera esencial a las sociedades campesinas e indígenas una serie de rasgos entre los cuales sobresale el comunitarismo. Estas tradiciones inhiben el reconocimiento de los intereses individuales y las dinámicas que estos intereses tienen con otros más grupales. En el caso de Nono, el peso de las economías familiares sobre la economía comunal, la resolución tomada por los propios campesinos de acabar con las comunidades, la migración hacia la ciudad por parte de las poblaciones más jóvenes,

así como las aspiraciones legítimas de conseguir mejores condiciones educativas para sus hijos en los espacios urbanos, son expresiones legítimas de los intereses de los individuos y de las familias de los ex trabajadores y ex huasipungueros de las haciendas.

La perspectiva moral sobre las economías y sociedades campesinas tiene una compleja y muchas veces trágica trayectoria (Figueroa, 2009). En el campo del pensamiento social, teóricos de la economía moral (Scott, 1976; Polanty, 1957) sostienen que las economías campesinas se caracterizan por desarrollar estrategias contra el apareamiento de las desigualdades sociales y por el mantenimiento de una supuesta igualdad. Una de las estrategias más visibles se supone que consiste en evitar las especializaciones propias de las sociedades modernas y construir una especie de holismo en el que se funden el parentesco, la religión y la política. La imagen de las sociedades campesinas e indígenas como espacios holísticos ha servido también como lugar de escape de las vanguardias intelectuales, que construyen imágenes sobre lo rural como lugar exento del racionalismo y del tecnicismo que atribuyen a la modernidad burguesa. En algunos casos, estas imágenes son altamente persuasivas y han sido alimentadas tanto por sectores de izquierda como por sectores vinculados a la Teología de la Liberación.

Críticas tempranas como las de Popkin (1979) muestran que en las sociedades campesinas las acciones de los individuos buscan el lucro, crean asimetrías económicas y sociales, a la vez que generan una esfera económica distinta del parentesco. Mientras, Lehman (1986) rastrea críticamente los postulados de Chayanov, quien supone una naturaleza anticapitalista del campesinado. Por su lado, críticas feministas han demostrado que la inhibición de lo público, que es un rasgo de las economías morales en las cuales los problemas que interesan al colectivo son evaluados desde una perspectiva privada, es un mecanismo eficiente de construcción de asimetrías políticas y económicas. Estas investigaciones muestran que la economía moral es funcional al establecimiento de asimetrías, no solo de género, sino también de raza y clase (Figueroa, 2009; Fernández-Kelly, 1983; Nancy Frazer, 1990; Scheper-Hughes, 1996; Sheriff, 2001).

La discusión del papel de las comunidades nos obliga a rescatar el uso de las perspectivas críticas no solo como un patrimonio de vanguardias intelectuales, sino como un patrimonio popular. La experiencia de Nono muestra que los propios campesinos fueron capaces de detectar la importancia de la comunidad y sus límites, y también de soñar en la posibilidad de su reinención contra el neoliberalismo.

## La disolución de las comunidades, el neoliberalismo y la expulsión campesina hacia el noroccidente de Quito

Como vimos, por razones estructurales y culturales, los campesinos de Nono no pudieron administrar sus tierras comunales de manera exitosa. Luego de la Reforma Agraria, la economía campesina se deterioró cada vez más, mientras en las haciendas se consolidaba un tipo de producción ganadera tecnificada que no necesitaba mano de obra. Esta producción se especializó en la monoproducción de leche, que era sacada hacia los mercados de Quito y de Ibarra, donde se ubicaba la principal receptora de la producción ganadera local: la empresa FLORALP.

Este acápite describe el proceso de disolución de las comunidades en el momento en que la economía campesina experimentó un gran deterioro frente al fortalecimiento de las haciendas tecnificadas. Hemos considerado importante narrar la perspectiva campesina para describir cómo las pequeñas unidades productivas respondieron a la coyuntura, en la que se dio tanto la disolución de la comunidad campesina como la consolidación de la hacienda ganadera tecnificada. Los testimonios muestran que en ese momento las unidades productivas de los campesinos entraron en una creciente dependencia de los agroquímicos, los pesticidas y fertilizantes, lo que determinó un creciente proceso de deterioro de las tierras manejadas por las comunidades y barrios, y se constituyó en un factor clave para la expulsión de campesinos hacia los barrios de Quito ubicados en las laderas del Pichincha.

Al referirnos a la consolidación de la ganadería en Nono, es importante anotar que esta actividad tiene antecedentes que se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando las élites hacendatarias empezaron los experimentos para aumentar la productividad de carne y leche. Carlos del Hierro, actual propietario de la hacienda San Miguel y descendiente de una familia que desde el periodo colonial tuvo extensas propiedades en Nono que llegaban hasta los actuales barrios del noroccidente de Quito, y a quienes se debe el nombre de uno de los barrios más populosos de la zona, conocido como La Mena del Hierro, cuenta que por lo menos desde 1904 su abuelo producía y exportaba mantequilla hacia Panamá, lo que nos habla de una producción lechera relativamente tecnificada. De otro lado, uno de sus tíos abuelos, Rubén del Hierro, fue el fundador de la Asociación Holstein en 1942, junto a otros influyentes hacendados como Alejandro Ponce Borja, Francisco Gómez de la Torre, César Peña Ponce y los hermanos Juan y Carlos Freile Larrea.

La mejoría de las razas es evidente si se tiene en cuenta que hacia 1980 la producción total de la hacienda era de 800 litros diarios antes de su división, mientras hoy en día solo una extensión de 60 hectáreas, fruto de las divisiones de la gran hacienda, produce 2 200 litros diarios. De acuerdo con Carlos del Hierro, la producción total de las tres haciendas en las que se dividió la original supera los 7 000 litros de leche diarios.

Otro interesante ejemplo de lo ocurrido con la producción ganadera nos habla del uso político de esta actividad, como ocurrió en la hacienda La Merced, donde los hacendados abandonaron conscientemente la producción agrícola e introdujeron la ganadería para expulsar a los campesinos y evitar su presión política en contextos de movilizaciones agrarias <sup>10</sup>.

El proceso de tecnificación y el notorio aumento de la producción por parte de las haciendas contrastan con lo que ocurrió con la economía campesina. Luego de la disolución de la hacienda y de las comunidades, la producción agraria de los campesinos sufrió un proceso de deterioro que obligaba a aumentar su dependencia a la producción lechera en pequeña escala.

Diversos estudios muestran cómo las pequeñas unidades económicas campesinas, cuando son sometidas a una sobreexplotación, sufren en poco tiempo serios deterioros ecológicos que inciden negativamente en su capacidad productiva.



<sup>9</sup> La asociación es una persona de derecho privado constituida por al menos cinco campesinos, considerando como tales a quienes trabajan habitualmente la tierra por cuenta propia y sin uso habitual de mano de obra por fuera del círculo familiar (Martínez).



Tempranamente Saunders (1961) estableció cómo los procedimientos intensivos utilizados en las pequeñas propiedades producen una erosión acelerada, mientras los altos niveles de productividad continúan en los valles fértiles que son utilizados como pastos por las haciendas. Esto permite entender cómo la disolución de las comunidades colocó a las pequeñas unidades campesinas en una real desventaja respecto a la producción ganadera de las haciendas. En Nono, la sobreexplotación de los bosques produjo una serie de efectos como el deterioro de las fuentes de agua y el empobrecimiento de los suelos. También la eliminación del bosque dejó sin alimentos a animales como las ardillas y los loros, que terminaron convirtiéndose en plagas sobre los cultivos de los campesinos.

En el caso de Nono, las tierras que fueron entregadas a los campesinos en barrios como Alaspungo y Alambi sufrieron un impacto ecológico desde el mismo momento en el que fueron adquiridas por los campesinos, ya que estos las explotaron intensivamente a través de la producción de carbón para poder pagar los costos correspondientes. El deterioro ecológico se puede ver claramente en un paisaje en el que sobresalen unos terrenos duros que cada vez se deterioran más por la ganadería, por la inexistencia de implementos adecuados como arados, azadones o tractores, y por la incapacidad de trabajar de una población envejecida.

En las condiciones de deterioro ecológico los campesinos tienen que invertir una parte importante de su capital en abonos químicos, pesticidas y fertilizantes, lo que produce varios efectos catastróficos para sus economías: por un lado, contribuye al empobrecimiento de las unidades familiares mientras que, al cabo de poco tiempo, el proceso de deterioro ecológico se acentúa, haciendo la tierra cada vez más necesitada de los agroquímicos. Este círculo vicioso se afianza también por el modelo que se privilegió en las unidades productivas campesinas, enfocadas en la monoproducción y el mercado, y en unas transacciones que, como veremos, tampoco las favorecían.

El problema ecológico y la fragmentación de las comunidades también han producido un serio problema alimentario. Según los testimonios de los propios campesinos de Alambi, en la época de las haciendas, cuando alcanzaban a dedicar un tiempo de su trabajo para el autoconsumo, el patrón alimenticio giraba en torno a las ocas, habas, mellocos y maíz, que se preparaba dulce y salado, o bien tostado.

También era habitual que tomaran coladas de cereales con leche y consumían carne casi todos los fines de semana o cuando se moría accidentalmente una res. En Alaspungo sembraban además cebada, una práctica que actualmente también se ha abandonado. Hoy, con los pocos excedentes que les quedan, los campesinos compran en el mercado de Cotocollao pastas y arroz. En la memoria campesina queda claro cómo el ciclo productivo antes del deterioro ecológico permitía que se produjera no solo para la satisfacción alimentaria de la población, sino que los mellocos, zanahorias, papas y ocas también permitían alimentar a los chanchos. Estos chanchos eran engordados y pelados, y con ellos se producía carne y manteca, lo que dejaba ciertos excedentes para la vestimenta.

El deterioro ecológico es descrito vívidamente por los campesinos, que comparan la tierra con seres humanos drogodependientes, que necesitan cada vez aumentar sus dosis para poder sobrevivir a su propio drama. A partir de los años setenta, las economías campesinas se han deteriorado por una serie de procesos que van de la compra de tierras a los hacendados, la creación y disolución de las comunidades, hasta la dependencia de los agroquímicos, cuya expresión más evidente es el abandono de la parroquia y el poblamiento de varios barrios del noroccidente de Quito.

En estas circunstancias se dio la especialización en la producción ganadera que, como veremos, también se hizo en condiciones muy desfavorables para los campesinos. Hay que tener en cuenta que la pequeña ganadería tiene limitaciones ligadas a la extensión de los terrenos, ya que los campesinos no pueden tener más de tres o cuatro vacas, y cuando las tienen están obligados a ampliar sus terrenos, lo que crea conflictos que en algunos casos se han resuelto mediante el traspaso de las propiedades adyacentes donde pastan las vacas.

Los campesinos organizan la producción y la comercialización de la leche de acuerdo a las posibilidades de los grupos familiares: los más pobres venden la leche a sus familiares con más posibilidades económicas, para que ellos la procesen en quesos y puedan tener un poco más de ganancias. De acuerdo a los testimonios de los propios campesinos, las familias más pobres, a la fecha actual reciben, como mucho, un poco más de cincuenta dólares a la semana. Con estas ganancias generalmente van al mercado de Cotocollao y compran especialmente arroz y espaguetis. Dado que la producción lechera requiere de poca mano de obra, los grupos familiares en general expulsan a los jóvenes a las laderas de Quito. Estas familias, que normalmente no poseen ni una cabeza de ganado, aún se dedican a la explotación ilegal de carbón, trabajan al diario cuando pueden y la panela constituye su comida habitual.

La ganadería también requiere una importante inversión por parte de los campesinos. La diferencia económica respecto a las haciendas no solo se ve en el escaso número de campesinos que llegan a tener un máximo de cuatro o cinco vacas, mientras las haciendas las tienen por cientos, sino también por la abismal diferencia en la capacidad productiva del ganado en ambos casos. Mientras una vaca en las haciendas puede llegar a producir hasta treinta litros de leche en un día, la producción campesina difícilmente supera los ocho litros diarios. En barrios como Alambi, muchos de los campesinos tienen vacas que producen dos litros diarios. Para el mantenimiento de su ganado, los campesinos necesitan sales mineralizadas para complementar la alimentación, que deben ser compradas cada ocho días, así como balanceados y melaza. También el ganado requiere ser desparasitado y vacunado y se necesitan antibióticos para cuando las reses se enferman. Los campesinos no pueden comprar las vacas mejoradas y más productivas ni tampoco pueden acceder al uso de pastos tecnificados, como los que usan los hacendados. Actualmente, el precio del pasto azul, beneficioso para la producción de leche, bordea los 300 dólares el quintal, lo que hace imposible su acceso a los campesinos.

Mientras en las haciendas se siembran una serie de complementos para la ganadería, como la vicia y avena, el pequeño campesino solo puede adquirir esos productos en el mercado. De acuerdo con Abel Cañar, la falta de adecuaciones técnicas, como comederos para los animales, impide que puedan alimentarse de nutrientes más accesibles como la melaza o el granillo, y obliga a que los campesinos compren vitaminas para suplir esos alimentos, lo que disminuye aún más las posibles ganancias. La cría de ganado, sin embargo, es atractiva al campesino no solo por la ganancia que produce día a día, sino también porque a mediano plazo las vacas pueden ser vendidas a buenos precios, lo que hace que el ganado sea considerado una inversión recuperable a mediano o largo plazo.

Otro de los puntos fundamentales para entender las distancias entre la economía campesina y la producción de las haciendas es el acceso a riegos y el uso de tractores. El acceso al agua no es solo un problema de concesión sino también de la capacidad de construcción de una adecuada infraestructura que permita su uso. El barrio de Alambi tiene una concesión de veinte litros por segundo y el comité pro-mejoras del mismo barrio tiene concesionados 0,52 litros por segundo. Sin embargo, de acuerdo al jefe de la Junta Parroquial de Nono, Santiago Enríquez, la captación tiene problemas técnicos relacionados con la pendiente, lo que hace que el agua no llegue o llegue muy poco.

Es importante anotar que ninguno de los barrios de la parroquia cuenta con agua potable. En Alaspungo, mediante un trabajo comunitario, están actualmente colocando mangueras para acceder a agua entubada. Actualmente los barrios están realizando gestiones ante la junta parroquial y el Oleoducto de Crudos Pesados -OCP-, que pasa cerca de la zona, para conseguir los materiales que permitan construir la infraestructura.

Las concesiones de agua dan una idea de la asimetría entre los barrios y las propiedades particulares en el acceso a este producto. En la parroquia de Nono existen un total de 95 concesiones dadas por la SENAGUA, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos -CNRH- y el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos -INERHI-. De estas, dos son para las juntas parroquiales de Nono y Calacalí, cinco para asociaciones y cooperativas de los barrios de Nono, una para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito -EPMAPS- y tres para empresas hidroeléctricas. El resto son concesiones privadas que incluyen una florícola, una urbanización de ingenieros civiles de Pichincha y las haciendas, que en muchos casos pueden llegar a tener monopolizar cuatro concesiones por hacienda, como puede verse en el banco de concesiones de SENAGUA del periodo 1973 – 2009, donde aparecen los nombres de varios de los hacendados de Nono (Banco Concesiones) <sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Agradesco a Melissa Moreano por haberme hecho saber sobre este documento, así como sus contribuciones en este acápite.

## Indagando etnográficamente las razones de la pobreza entre la pobreza

A lo largo del trabajo hemos ido señalando las razones estructurales que han construido las difíciles condiciones que caracterizan a la parroquia de Nono. Sin embargo, hemos podido constatar que algunas familias han logrado sortear con un poco más de éxito ese difícil panorama, y que casi todas estas familias han cumplido un papel protagonista en la historia reciente de la parroquia. Esto nos permitió hacer una exploración etnográfica, dialógica y crítica con algunos de los dirigentes de Alaspungo, Alambi y Yanacocha acerca de los modos como las distintas familias han afrontado la situación económica. En estos diálogos participaron Emiliano Ramos, de Alaspungo, Manuela Ambas, de Alambi, y Abel Cañar, de Yanacocha.

El líder Emiliano Ramos y su esposa Teresa nos ofrecieron una descripción muy vívida y consciente de la situación económica que padece al menos la mitad de los cerca de cincuenta pobladores que conforman el barrio de Alaspungo. Allí, al menos unas veinte familias están formadas por parejas mayores o por ancianos y ancianas solos, cuyos hijos y nietos viven en Quito y solo eventualmente vuelven a su tierra de origen. Varios de ellos viven en una profunda depresión y en deplorables condiciones en unas casas que describen como “huecos llenos de goteras”.

Al reflexionar sobre las causas de las condiciones tan desesperantes en las que viven muchos de sus paisanos, Emiliano Ramos las contrasta con su propia vida y evoca el tiempo de la hacienda, cuando todos los trabajadores compartían iguales condiciones de pauperización. En esa época cada uno tenía solo un vestido y un pantalón, por lo que se definían a sí mismos como que vivían con “calzón y persona”. En esa época, si de causalidad alguien era invitado a una fiesta, tenía que buscar quien le prestara un pantalón o una chompa para ponerse.

En un tiempo en el que no se necesitaban trabajadores, Emiliano Ramos salió de la hacienda de Chiquilpe y trabajó como controlador de buses. También contrabandear alcohol desde Nangalito para vender en Quito, luego de sortear los puntos de vigilancia de los guardias o de sobornarlos si lo encontraban. Desde entonces aprendió a administrar sus propios ingresos. Luego de un tiempo volvió a Chiquilpe, donde participó de las actividades políticas a favor de la Reforma Agraria.

Emiliano Ramos valoriza su militancia en la organización campesina no solo como una escuela de capacitación política, sino también como una experiencia que le dio herramientas para su propia superación personal. Tanto Emiliano como su esposa creen que quienes tuvieron una militancia desarrollaron una mayor autovaloración e incluso sostienen que los que hoy sufren con mayor evidencia la pobreza son los mismos que se oponían pasivamente a la lucha contra los hacendados por “miedo al comunismo”. El entrenamiento político le dio pautas de organización para su vida cotidiana. Así logró gestionar la entrega de unos predios de la hacienda Chiquilpe a los que tenía derecho en el contexto de la Reforma Agraria, tanto por su propio trabajo como por toda la vida laboral que su padre había dedicado a la hacienda. Con esas pequeñas propiedades, Emiliano pudo hacer los trámites con el Banco de Fomento para la adquisición de un crédito que supo utilizar para mejoras en su terreno, que le permitieron incluso comprar una camioneta. Ese crédito lo pagó puntualmente durante veintinueve años. Sin embargo, la situación económica de Emiliano y de su familia también es de premuras.

En su testimonio, Emiliano critica la inercia y la falta de iniciativa de sus compañeros, que se han empobrecido desde la compra y distribución de los terrenos de la hacienda, mediante un interesante ejercicio de crítica cultural. En su perspectiva, mientras que aquellos que fueron militantes aprendieron a autogestionar sus pequeñas propiedades, aquellos que desde un principio mostraron poco entusiasmo con los procesos organizativos y con la lucha llevada a cabo, son quienes más han empeorado su situación, además de que han sido incapaces de trabajar para ellos mismos y han tenido que trabajar para otros patrones o para otros intermediarios.

La soledad derivada por la soltería, la viudez o los conflictos de pareja son asociados a la pobreza. Los testimonios que muestran la relación entre desestructuración familiar y pobreza en el contexto de estas economías campesinas permiten suponer la dimensión del impacto que causa en las economías domésticas el desplazamiento de la población hacia Quito, que alcanza a más del noventa por ciento de la población. La importancia de contar con una familia que permita satisfacer las necesidades de los grupos es mostrada por Emiliano y Teresa, cuando miran con aire crítico la facilidad con que se consigue el divorcio en Quito y la comparan con lo indispensable que resulta en Nono el mantenimiento de la pareja para la propia sobrevivencia de los miembros.

En su testimonio, Emiliano dice que "... en un hogar es fundamental marido y mujer... aquí nosotros nuestra cultura... hasta se trompea, se da duro, ha dado duro, pero nunca se ha desunido la pareja. Marido y mujer en el campo... para (que) un matrimonio llegue a tener éxito, carros, cosas y así estando juntos, peleando o no...". Esto lo ejemplifica con los individuos solos, imposibilitados de cubrir tareas tan distintas, que van desde madrugar a ordeñar, sembrar o cosechar, hacer las faenas del campo y dedicarse además a las actividades de la casa como cocinar.

El caso de Alambi es más complejo. Ahí viven aproximadamente unas veinte familias, muchas de ellas formadas por parejas solas, cuyos hijos y nietos también han salido hacia Quito y a la pobreza, donde el alcoholismo y los problemas educativos los golpean con fuerza. El origen del barrio actual, ligado a las negociaciones que se hicieron con el sacerdote jesuita Santiago Agrediano, nos remite a un proceso en el que hubo un acceso diferencial a la tierra por parte de los trabajadores de la hacienda<sup>12</sup> a causa de la voluntad del sacerdote. Por los testimonios recogidos podemos ver que Agrediano mantuvo una relación moral con sus trabajadores. A pesar de esto, los habitantes de Alambi fueron los que más pagaron por las tierras que recibieron, a la vez que por la voluntad del cura unos ex trabajadores salieron favorecidos mientras se excluyó a otros.

Uno de los legados más complejos del dominio moral y que también ha incidido en la debilidad de la economía campesina regional de la hacienda ha sido la inexistencia de relaciones mercantiles entre los campesinos. Desde el tiempo de las haciendas la producción de la parroquia estuvo enfocada hacia Quito, mientras los campesinos, inmersos en las haciendas, estaban imposibilitados de mantener relaciones mercantiles con los trabajadores de otros barrios o comunidades. La falta de entrenamiento en las relaciones mercantiles ha sido un factor fundamental en el debilitamiento de la organización campesina. Los campesinos de Nono, sin entrenamiento mercantil negocian de manera individual con comerciantes asociados en el mercado, quienes imponen las reglas del juego. Las asimetrías en las negociaciones no son procesadas de manera colectiva sino que tienen que resolverla cada individuo de manera desfavorable.

De acuerdo a Teresa Ramos, de Alaspungo, el hábito de enfocar la producción hacia Quito hace que, en muchos casos, los campesinos prefieran no tomar leche o quesos por venderlos en la ciudad, donde compran productos menos esenciales o menos nutritivos.

---

<sup>12</sup> En el caso de La Merced ocurrió igual, de acuerdo al testimonio de Josefina Proaño.

Cuando indagamos el modo como los campesinos conciben las relaciones mercantiles, vemos que para ellos esas relaciones no se dan al interior de la propia parroquia, sino que están dirigidas solo hacia Quito. En el caso de Alambi, cuando hay unos pocos excedentes los campesinos esperan los autos que bajan a Quito y tratan de colocar esos productos en el mercado de Cotocollao. Estos intentos de comercialización son hechos por los grupos familiares y no hay ninguna organización colectiva que los respalde.

De otro lado, las relaciones que tienen los comuneros con los comerciantes en el mercado de Nono son totalmente asimétricas, ya que se encuentran sometidos a la voluntad de los comerciantes, quienes utilizan distintas estrategias para imponer sus condiciones. Cuando los campesinos llegan con sus cosechas pidiendo precios que consideran justos, los comerciantes los hacen esperar muchas veces hasta bien entrada la tarde, y ante la posibilidad de que los productos se dañen y urgidos de volver a sus barrios, los campesinos terminan aceptando el precio que les imponen los comerciantes del mercado.

En rigor, las relaciones dentro de los mercados están determinadas por grupos que trabajan asociativamente y que así construyen y mantienen su poder. Muchas veces, cuando los comerciantes quieren imponer su voluntad en las negociaciones con los campesinos de Nono, los amenazan con traer los policías municipales y hacerlos apresar o sacar del mercado porque no tienen puestos ni funciones oficialmente asignados.

El testimonio de uno de los campesinos de Alambi es vívido cuando relata que decidió vender algunos de sus productos en el mercado, y consciente de que no tenía intermediarios, intentó colocar un puesto en el que podría vender más barato. Inmediatamente llegaron los comerciantes diciéndole que él no podía vender ahí porque no había pagado los impuestos y lo amenazaron con enviarlo a la Policía Municipal. Luego efectivamente la Policía llegó y decomisó sus productos, que fueron después repartidos entre los propios comerciantes y policías.

En otra ocasión, este mismo campesino llegó con tres quintales de papa al precio oficial y una comerciante le dijo: "no le voy a pagar ese precio porque ya se bajó. ¿No tendrá la radio? ¿No oirá las informaciones? Las informaciones el gobierno hace es para que oiga y no se pase con el cuarto solo lleno de música y de otra cosa. Si quiere, aquí deje. Y si no, lleve". En los años ochenta los campesinos intentaron crear un mercado, pero tuvieron varias dificultades por la falta de materiales que permitieran el procesamiento de alimentos, como frigoríficos o cortadoras, sin los cuales no podían responder a las demandas diarias de carne o leche.



También los afectó la falta de acceso a agua de riego que les permitiera tener una producción agrícola sostenida. Ante las falencias de abastecimiento empezaron a llegar los comerciantes de Quito a proveer de los productos necesarios y acabaron monopolizando la comercialización.

Los productos de Quito no solo eran más caros que los noneños, sino también más caros que los de Cotacollao, lo que contribuyó a que el mercado languidciera y terminara. De acuerdo con el testimonio de una habitante de Alaspungo, por falta de autoconsideración, la gente prefería comprar los productos de Quito y no de los parroquianos. Otra dificultad de la experiencia del mercado fue que en muchas ocasiones los campesinos llegaban con los mismos productos, lo que saturaba el mercado e impedía que los campesinos se compraran unos a otros. Esto aumentaba las pérdidas económicas por el desperdicio de productos.



## Migrando a Quito

La consecuencia más obvia de todas las complejas condiciones que han tenido que afrontar los pobladores de Nono es un permanente desplazamiento hacia distintos barrios del noroccidente de Quito, como La Mena del Hierro, Santa María, San José, San Miguel, Santa Rosa, el Mirador del Noroccidente, las cooperativas Jaime Roldós y la Pisulí, entre otros. Los cálculos de la población de Nono hablan de unos 1 500 habitantes en la parroquia. En barrios como Alambi viven unas cincuenta personas, mientras en los barrios del noroccidente, y especialmente en Santa Rosa, viven alrededor de unos 500 alambeños. Casi la totalidad de los hijos y nietos de los catorce socios que fundaron la cooperativa de Alambi en los años setenta para negociar la compra de tierras al cura Santiago Agrediano viven en los barrios de las laderas del noroccidente de Quito. Esta condición es similar en otros barrios.

En Santa Rosa vive la familia Ipo, que salió de Nono en 1995. Esta familia está conformada por una pareja, Juan Ipo y Manuela Ambas, quienes tienen seis hijos, tres hombres y tres mujeres, y doce nietos. De los hijos e hijas que aún están solteros, un hombre está en el cuartel, una mujer vive en Quito junto a su familia, y la hija menor está en Nono, donde estudia la secundaria.

En su testimonio cuentan que cuando salieron de Alambi ya no había allí empleo para ninguno y no podían vivir en las tierras que tenían. Así que la familia se dividió: el padre se ubicó con los hijos en Santa Rosa, mientras la esposa, Manuela Ambas, quedó de modo permanente en Alambi trabajando en sus tierras.

El abuelo tenía un terreno en Quito y allí empezaron a trabajar en una ladrillera que construyeron en un terreno alquilado. En la ladrillera trabaja el abuelo con una hija, Aida, y un hijo, Víctor, en una actividad que empieza de madrugada: pasan barro, botan y almacenan tierra, moldean los ladrillos y luego de un tiempo de secado los meten a los hornos. El trabajo en la ladrillera no genera ninguna posibilidad de ahorro, ya que tienen que pagar arriendo, servicios de agua y luz, la educación de los nietos, la alimentación y el vestido.

La familia se junta los fines de semana, cuando los de Quito viajan a Alambi, donde generalmente se dedican a los oficios agrícolas y ayudan en el mantenimiento de unas quince hectáreas que, junto a un terreno de 1 500 metros que tienen en Quito, conforman el patrimonio familiar.

Otro de los hijos, Patricio, estudió cerrajería y ejerce su oficio. Otro, Guillermo, hizo un curso de técnico automotriz, pero tuvo que dedicarse a la albañilería porque al terminar el curso tenía que empezar de ayudante recibiendo el salario mínimo hasta llegar a ser maestro o tener su propio taller. En esas circunstancias abandonó los sueños de la mecánica y ejerce la albañilería. Algo parecido ocurrió con Kléver, quien estudió un curso para técnico automotriz pero ejerció de albañil y hoy está en el cuartel. La hija menor de los Ipo vive en Nono, donde estudia el colegio. De los doce nietos, tres estudian en el colegio, tres en la escuela y los otros son aún pequeñitos y pasan el tiempo en una casa en Cotocollao.

Otra razón que tuvo la familia para salir de Alambi fue por la educación de los hijos: en Alambi la escuela tenía un solo profesor para los seis grados, que materialmente no podía ofrecer una adecuada capacitación a todos los niños y niñas. En Alambi tampoco hay colegio, por lo que los niños y niñas solo tienen la opción de terminar la primaria. Sin embargo, ahora consideran que uno de los problemas que tienen en Quito es no poder dejar a los niños solos y ven que más seguridad tiene la hija que estudia en Nono.

Los anhelos de educación, sin embargo, no pudieron ser totalmente satisfechos. Los arreglos y los desajustes que vivieron los primeros años de su traslado a Quito impidieron que los hijos cumplieran el ciclo educativo y solo alcanzaron a terminar la primaria, con la excepción de uno, que alcanzó a terminar la secundaria, y de la hija menor que está por terminarla en el colegio de Nono. De hecho, este anhelo es una frustración para la casi totalidad de alambeños de Quito, ya que según el testimonio de la familia Ipo, con muy pocas excepciones los hombres están dedicados a la albañilería y las mujeres trabajan como empleadas domésticas. En sus cálculos, de los quinientos alambeños no llegan a cinco quienes terminaron la universidad o estén actualmente estudiando allí. Víctor, que tiene a sus niños terminando el colegio, sueña con que ellos sí puedan estudiar en la universidad.

Según el testimonio de Víctor Ipo, no hay ninguna ayuda especial que la comunidad otorgue a quienes han decidido trasladarse a Quito, sino que cada uno lo resuelve a su manera. Los migrantes de Alambi en Quito suelen reunirse los domingos para jugar partidos y las fiestas que involucran a la comunidad, como la celebración a la Virgen de Alambi, es organizada por los que viven en Alambi, a pesar de que convoca a todos los alambeños y a muchos de los noneños que viven en Quito. En Semana Santa y para la fiesta de los difuntos, grandes romerías de alambeños se desplazan a su comunidad de origen. Las fiestas constituyen una ocasión para que los jóvenes se comprometan y se casen.

De acuerdo con la familia Ipo, los alambeños están empezando a familiarizarse con el acceso a créditos con bancas y cooperativas. Estos créditos los utilizan para resolver asuntos de vivienda o para sacarlos de apuros, pero consideran que en un futuro pueden servir para consolidar proyectos económicos.

La familia Ipo, que mantiene sus vínculos con Alambi, expresa sentimientos ambivalentes respecto a las ventajas y desventajas de vivir en Quito y el deseo de volver o no a su tierra. A pesar de que la educación y el trabajo en Quito son más estables y con mejores perspectivas, no dejan de quejarse de lo costoso que resulta todo, así como de la inseguridad que los obliga a mantener encerrados a los niños pequeños. Los Ipo no abandonan completamente los sueños de volver a su tierra, pero creen que eso solo es posible con una actividad lo suficientemente rentable como para justificar la decisión.

Dentro de sus planes está colocar un criadero de pollos y cerdos, para lo cual tendrían que ampliar los terrenos y resolver las dificultades de riego. Cuando ven el comportamiento de sus hijos y nietos admiran su felicidad cuando llegan a Alambi, donde "... salen al campo y se sienten como un animalito que se le suelta. Aquí como usted ve no hay espacio. Allá ellos corretean. A ellos es como soltarle a un animalito del corral. Allá se sienten tranquilos. ¿Qué será, si será bueno o no regresar?"



## Conclusiones

En este trabajo se indagó el proceso que condujo al triunfo de la hacienda ganadera y a la compleja situación que actualmente caracteriza a los ex trabajadores de las haciendas y a sus descendientes, tanto en Nono, una parroquia rural de Quito, como en los barrios de las laderas del Pichincha donde se han asentado tras migrar a la ciudad.

A través de los testimonios de una serie de dirigentes parroquiales se reconstruyeron los episodios que ocurrieron en cuatro haciendas de la parroquia, en las cuales los efectos de las reformas agrarias de 1964 y 1973 fueron más evidentes. Se hizo uso de una metodología que combinó el género testimonial y la revisión de archivos, para apoyar la reconstrucción de la historia agraria reciente, junto a contribuciones de la etnografía colaborativa, la antropología pública y la etnografía dialógico crítica, para indagar las causas estructurales y culturales que han contribuido a crear las condiciones de marginalización de los campesinos y campesinas de la parroquia, así como para el diseño de eventuales mecanismos que contribuyan a superarlas.

La investigación permitió comprobar el liderazgo que tuvieron los sectores hacendatarios en los procesos de Reforma Agraria, lo que ha sido señalado por diversos estudios como una característica dominante en Pichincha. A pesar de que Nono es una parroquia pequeña con cercanías entre los barrios que estaban inicialmente insertos dentro de las haciendas, las experiencias que tuvieron los campesinos en las haciendas fueron distintas. De un total de más de sesenta haciendas que existían antes de las reformas agrarias, actualmente solo hay tres barrios ligados a los procesos que se dieron entre trabajadores y propietarios: Alaspungo, Alambi y Yanacocha.

El caso de Alaspungo es notorio, porque fue el único lugar donde los ex trabajadores de la hacienda San Eloy cumplieron un papel protagónico al forzar a su favor la venta de las tierras. En Alambi, un sacerdote jesuita creó una red de relaciones paternalistas e indujo la creación de una asociación que compraría sus tierras en condiciones impuestas por él.

En Yanacocha, una larga tradición de ausentismo de unos propietarios que salieron de la hacienda desde mediados del siglo XX hizo que algunos ex trabajadores de la hacienda se asociaran para poder disputar las tierras con un ex mayordomo y con unos vecinos que querían apropiarse de las tierras. La asociación campesina terminaría negociando con el Estado, que a su vez había intervenido y adquirido el dominio de los predios.

Otra hacienda a la que se hace referencia es La Merced, donde desde temprano los propietarios iniciaron un proceso de transformaciones encaminadas a expulsar a los trabajadores y evitar la presión social que éstos efectivamente harían en el contexto de las reformas agrarias. En el caso de La Merced, algunos de los trabajadores recibieron tierras en tan pésimas condiciones y tan aisladas que el barrio La Prenda, hecho por antiguos trabajadores de esta hacienda, virtualmente ha desaparecido.

Igualmente se analizaron las experiencias de los campesinos, que luego de la implementación de la Reforma Agraria, se organizaron en comunidades que funcionaron solo hasta que terminaron de pagar las deudas contraídas por la compra de las tierras que terminaron en su poder. Asimismo, vimos cómo estas comunidades fracasaron y cómo las causas de estos fracasos fueron analizadas críticamente con los propios entrevistados y entrevistadas.

Las comunidades sufrieron presiones por la necesidad de expandir los terrenos para la actividad ganadera, por el peso real que tenían las familias particulares por encima del nivel comunitario, pero también por las ambigüedades en la titulación de la tierra: mientras el Estado había puesto como condición para la implementación de la Reforma Agraria la creación de formas asociativas, cuando los campesinos intentaban acceder a créditos los bancos les exigían titulaciones individuales. Otras razones, ubicadas en lo que se denomina el plano moral, fueron detectadas como causantes del fracaso de la comunidad: el incumplimiento de los acuerdos, el manejo irresponsable de la tierra comunal y el pago de créditos, el intento de aprovechamiento de parte de algunos, etc.

También se analizaron las condiciones de los campesinos y campesinas luego de la disolución de las comunidades, considerando que éstas facilitaron la entrada del modelo neoliberal, en el que la producción se enfoca hacia afuera y aparece una gran dependencia hacia los agroquímicos, fertilizantes, fungicidas e insecticidas.

Se pudo constatar, a través de la memoria vívida de los campesinos, cómo este nuevo modelo vino acompañado de un proceso de deterioro de las condiciones ecológicas que, junto a la inexistencia de fuentes de trabajo, se convirtieron en factores fundamentales para la expulsión de los campesinos hacia los barrios de las laderas del noroccidente de Quito.

El análisis de todo este proceso busca ser una contribución al conocimiento de las complejas articulaciones entre las zonas rurales y las zonas urbanas de Quito. Se partió de la premisa de que un conocimiento articulado de lo rural y lo urbano puede ofrecer elementos para intervenciones estatales y acciones sociales que permitan imaginar soluciones a los graves problemas de deterioro social, económico y ecológico que afectan a Quito y a su entorno rural.



The first of these is the fact that the  
... of the ... of the ... of the ...  
... of the ... of the ... of the ...  
... of the ... of the ... of the ...

The second of these is the fact that the  
... of the ... of the ... of the ...  
... of the ... of the ... of the ...  
... of the ... of the ... of the ...





## BIBLIOGRAFÍA

1. Allen, Adriana y Miguel Lacabana (2003), "A manera de presentación más allá de la dicotomía urbano-rural: desarrollo, medio ambiente y pobreza en la interfase periurbana", CDC [online], Vol.20, No.53 [citado 25 marzo 2011], pp.1-6. Disponible en la World Wide Web: <[http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1012-25082003000200001&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082003000200001&lng=es&nrm=iso)>. ISSN 1012-2508.
2. Barahona, Rafael (1965), "Una tipología de haciendas en la sierra ecuatoriana", en *Reforma Agraria en América Latina, procesos y perspectivas*, Oscar Delgado (compilador), Fondo de Cultura Económica, México.
3. Becker Marc y Silvia Tutillo (2009), "Historia Agraria y Social de Cayambe", FLACSO, Abya-Yala, Quito.
4. Bretón Solo de Zaldívar, Víctor (2009), "El desarrollo comunitario como modelo de intervención en el medio rural", CAAP, Quito.
5. Bretón Solo de Zaldívar, Víctor (2001), "Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos: ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo, FLACSO - Sede Ecuador, Quito.
6. Burch, Sally (2007), "Compartir conocimientos para el desarrollo rural: retos, experiencias y métodos", Agencia Latinoamericana de Información ALAI, Quito.
7. Constitución del Ecuador (2008), Asamblea Constituyente, Quito. En:[http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf)
8. Melissa Cheker, David Vine and Alaka Wali (2010), "Introducing Public Anthropology Reviews" in *American Anthropologist*, vol. 112, Issue 2, American Anthropologist Association, pp. 308.
9. Chiriboga, Manuel (1984), "Campesinado andino y estrategias de empleo", en *Estrategias de supervivencia de la comunidad andina*, José Sánchez-Parga et ál., CAAP, Quito.
10. Coronel, Valeria (2010), "A Revolution in Stages: Subaltern Politics, Nation-State Formation, and the Origins of Social Rights in Ecuador 1834 - 1943", NYU, Tesis Doctoral en Historia, New York.

11. De la Cadena, Marisol (2000), "Indigenous Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco Peru, 1919-1991", Duke University Press, Durham, N.C.
12. Dubois, W. E. B. (2005), "The Souls of Black Folk", Pocket Books, New York, London, Toronto, Sydney.
13. Durkheim, Emilio (1967), "De la división del trabajo social", Schapire Editor, Buenos Aires, pp. 346.
14. Escobar, Arturo (1995), "Encountering development: the making and unmaking of the third world", Princeton University Press, Princeton.
15. Johannes, Fabian (1983), "Time and the other: how anthropology makes its object", Coloumbia University Press, New York.
16. Fals Borda, Orlando (1986), "La investigación-acción participativa: Política y epistemología", en La Colombia de hoy, Álvaro Camacho G. (editor), Cerec, Bogotá, pp. 21-38.
17. Ferguson, James (2002), "Mimicry and Membership: Africans and the «New World Society»", en Cultural Anthropology, Vol. 17, No. 4 pp. American Anthropological Association, 551-569.
18. Fernández-Kelly, María Patricia (1988), "For we are sold I and My People: Women and Industry in Mexico's Frontier", University of New York Press, New York.
19. Figueroa, José Antonio (2009), "Realismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe Colombiano", ICANH, Bogotá.
20. Figueroa, José Antonio (1997), "Comunidades indígenas, artefactos de construcción de la identidad étnica en los conflictos políticos del Ecuador contemporáneo", en Revista Colombiana de Antropología, Vol. 33, Bogotá, pp. 185-219.
21. Figueroa, José Antonio (2007), "Etnización de la política, una lectura desde la teoría crítica", en Etnicidad y Poder en el Mundo Andino, Christian Buschges (editor), Guillermo Bustos y Olaf Kaltmeier, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de Bielefeld, Corporación Editora Nacional, Quito.
22. Foucault, Michel y Deleuze, Gilles (1977), "Los intelectuales y el poder: Gilles Deleuze entrevista a Michel Foucault", en Microfísica del Poder, Michel Foucault, La Piqueta, Madrid. Varias versiones electrónicas: <http://ceguch.8m.com/foucault.htm>

23. Flores G., Alberto (1987), "La comunidad campesina en la sierra central, siglo XIX", en *Comunidades campesinas: cambios y permanencias*, Fernando Oshige (editor), Centro de Estudios Sociales Solidaridad, Chiclayo, pp. 115-133
24. Golte, Jurgen (1980), "La racionalidad de la organización andina", IEP, Lima.
25. Fraser, Nancy (1999), "Rethinking the Public Sphere. A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", in *Habermas and the Public Sphere*, Craig Calhoun (editor), MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, pp. 109-42.
26. Freire, Paulo (1970), "Pedagogía del oprimido", Tierra Nueva, Montevideo.
27. Gerstl-Pepin, Cinthya I., Gunzenhauser, Michael G. (2002), "Collaborative team ethnography and the paradoxes of interpretation", in *International Journal of Qualitative Studies in Education*, Vol. 15, Issue 2, March, Sage Journals Online, pp. 137-154.
28. Goode, Judith (2009), "Producing Knowledge for Public Use: New Challenges in the U.S. Academy" in *Anthropology in Action*, Berghahn Books and the Association for Anthropology in Action.
29. Guerrero, Andrés (1984), "Estrategias Campesinas Indígenas de Reproducción: de Apegado a Huasipunguero (Cayambe-Ecuador)", en *Estrategia de Supervivencia en la Comunidad Andina*, CAAP, Quito, pp. 217-253.
30. Guerrero, Fernando (1990), "Economía y Estructura de Poder en las Comunidades Campesinas: el caso de los Chibuleos", en *Etnia, poder y diferencia en los Andes Septentrionales*, José Sánchez-Parga (compilador), Abya-Yala, Quito, pp. 113 - 174.
31. Gurovich Weisman, Alberto (2003), "Conjugando los tiempos del verbo idealizar: los huertos obreros y familiares de la pintana, Santiago de Chile", *CDC* [online], Vol. 20, No. 53 [citado 25 de marzo de 2011], pp. 65-76.  
 Disponible en la World Wide Web:  
[http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1012-25082003000200006&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082003000200006&lng=es&nrm=iso). ISSN 1012-2508.

32. Harvey, David (1998), "La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural", Amorrortu Editores, Buenos Aires.
33. Ibarra, Hernán (2006), "Entre la oposición y la colaboración: El Partido Socialista Ecuatoriano durante el gobierno de Galo Plaza (1948-1952)", en Ecuador Debate, Quito, pp. 37 - 60.
34. Laclau, Ernesto (2004), "Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia", Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires.
35. Lassiter, Luke Eric (2001), "«Reading over the Shoulders of Natives» to «Reading Alongside Natives», in Literally: Toward a Collaborative and Reciprocal Ethnography, Journal of Anthropological Research, Vol. 57, No. 2, University of New Mexico Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3631564> Accessed: 13/12/2010 10:05Y, pp. 137-149.
36. Lehmann, David (1986), "Two Paths of Agrarian Capitalism, or a Critique of Chayanovian Marxism in Comparative Studies" in Society and History, Vol. 28, No. 4, Cambridge University Press, pp. 601-627.
37. Mandel Butler (2009), "Notes on a Dialogical Anthropology" in Anthropology in Action, 16, 3:20-31, Berghahn Journals.
38. McGranahan, Carole (2006), "Introduction: Public Anthropology", in India Review, Vol. 5, No. 3-4, July/October, Taylor & Francis Group, LLC, pp. 255-267.
39. Martínez, Luciano (2000), "Antología de estudios rurales", FACSO, Quito.
40. Martínez, Luciano (2000), "La investigación rural a finales de siglo", en Antología de estudios rurales, Luciano Martínez (compilador), FLACSO, Quito.
41. Mignolo, Walter (2001), "The darker side of the renaissance: literacy, territoriality, and colonization", The University of Michigan Press.
42. Peacock, James L. (1997), "The Future of Anthropology", in American Anthropologist, New Series, Vol. 99, No. 1, Mar, pp. 9-17, published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association URL: <http://www.jstor.org/stable/682128> Accessed: 14/12/2010 13:19.

43. Popkin, Samuel (1979), "The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam", University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
44. Portelli, Alessandro (1991), "The death of Luigi Trastulli: memory and the event", State University of New York Press, New York, pp. 1-26.
45. Rappaport, Joanne (2005), "Intercultural Utopias: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, and Ethnic Dialogue in Colombia" Duke University Press, Durham.
46. Rappaport Joanne (2007), "Intelectuales públicos indígenas en América Latina: una aproximación comparativa", en Revista Iberoamericana, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, pp. 615-630.
47. Reichel, Gerardo y Alicia Reichel (1966), "The people of Aritama: The Cultural Personality of a Colombian Mestizo Village", Routledge and Kegan Paul, London.
48. Rubio, Blanca (2003), "Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal", Plaza y Valdés Editores, Universidad Autónoma de Chapingo, México.
49. Tönnies, F. (1946), "Principios de sociología", FCE, México.
50. Said, Edward (1990), "Orientalismo", Libertarias/Prodhufi, Madrid.
51. Scott, James (1977), "The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia", Yale University Press, New Haven and London.
52. Sheriff, Robin (2001), "Dreaming Equality. Color, Race, and Racism in Urban Brazil", Rutgers University Press, New Brunswick and London.
53. Scheper-Huges, Nancy (1995). "The primacy of the Ethical: Propositions for a Militant Anthropology", in Current Anthropology, The University of Chicago Press, pp. 36-3, 409-440.
54. Spivak, Gayatri (2003), "¿Puede hablar el subalterno?", en Revista Colombiana de Antropología, Vol. 39 enero-diciembre, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, pp. 297-364.
55. Temple, Dominique (1995), "La dialéctica del don. Ensayo sobre la oikonomía de las comunidades indígenas", Hisbol, La Paz.
56. Weber, Max (2002), "Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva", Fondo de Cultura Económica, México DF, pp. 12-37.

## Anexo:

# Recomendaciones de Políticas Públicas Rurales

## Propuesta de políticas públicas agrarias

La parroquia de Nono es la más pobre de todo el Distrito Metropolitano, con una incidencia de pobreza de más del 83%. A la vez, presenta los peores indicadores de alfabetización, escolaridad y hacinamiento (Municipio de Quito, 2010).

En este sentido, sostenemos que la comprensión del cuadro que describe el triunfo de la hacienda es clave para conocer las condiciones actuales de la parroquia. Como se muestra seguidamente, existen evidentes conexiones entre los problemas más acuciantes de la parroquia y la reciente historia de las haciendas. Como vimos, en todos los casos la hacienda logró imponer su hegemonía regional y los campesinos, en su vasta mayoría, quedaron replegados a una cantidad de tierra que, por su extensión, por las distancias a mercados, por la dificultad en el acceso a créditos, por la falta de legalidad de los títulos o por sus condiciones ecológicas imposibilitó una gestión adecuada.

Un elemento fundamental para entender los problemas estructurales por los que atraviesa la población de Nono tiene que ver con la creciente hegemonía de un modelo que viene acompañado de distintas complejidades superpuestas: el modelo de monocultivo intensivo dirigido a los mercados regionales, nacionales o internacionales.

En el caso específico de Nono, esto ha tenido dos expresiones diferentes pero análogas, tanto en el campo de la producción lechera de las haciendas con explotación intensiva, como en el campo de la producción agrícola de las pequeñas propiedades campesinas que abandonaron la producción para el autoconsumo y privilegiaron la producción demandada por el mercado.

El modelo que se impuso en Nono, como en el resto del país y el continente, requería para su continuidad varias condiciones: en primer lugar, un uso cada vez más creciente de abonos químicos, plaguicidas e insecticidas. La combinación del uso intensivo del suelo, junto al irracional uso de fertilizantes y plaguicidas químicos ha producido como resultado un peligroso proceso de empobrecimiento del suelo, que se sustituye solo mediante la utilización de dosis cada vez mayores de fertilizantes y plaguicidas.

Para que esto sea posible los campesinos tienen que entrar en un círculo de endeudamiento creciente a través de créditos costosos que son invertidos principalmente en la compra de los químicos. En este proceso las exiguas ganancias de la economía campesina van hacia las industrias químicas transnacionales y hacia quienes hacen los préstamos.

En este contexto se proponen las siguientes políticas públicas agrarias:

- Impulsar entre medianos y pequeños propietarios una campaña sistemática tendiente a revertir la tendencia del monocultivo enfocado hacia la exportación y lograr la valoración económica y simbólica de una producción agraria destinada a la soberanía alimentaria y enfocada al mercado interno, local y regional.

Esta campaña debe crear estímulos económicos encaminados a captar una fuerza de trabajo que se dedique principalmente a hacer real la soberanía alimentaria, lo cual permitiría que las ganancias fueran a los propios campesinos y a la sociedad en su conjunto, no a las transnacionales o al capital financiero.

En muchos de los testimonios recogidos en Nono, los campesinos son conscientes de la importancia que alguna vez tuvo la parroquia como un proveedor de productos agrícolas para Quito, pero esta tendencia se revirtió a partir de los años setenta por razones que fueron expuestas en el acápite sobre la historia de las haciendas.

La vocación de Nono como proveedor de productos agrícolas y alimenticios para la propia parroquia y para Quito puede lograrse mediante una política de estímulos dirigida a quienes manifiesten una clara predisposición a crear un modelo productivo que tenga como prioridad la alimentación de los propios habitantes de la zona y los mercados más cercanos de Quito, como por ejemplo Cotacollao.

El diseño de estas políticas públicas da un contenido cierto a la soberanía alimentaria y produce una serie de efectos beneficiosos en el campo ecológico y en la salud, como se irá detallando a continuación. Estas políticas deben crear unas condiciones que permitan generar niveles de capitalización atractivos, especialmente para los jóvenes y las mujeres dentro de las economías campesinas. Una de las condiciones favorables para esta capitalización se puede ver en la atracción cada vez mayor de acceso a productos alimenticios orgánicos y naturales.

En este sentido, se propone:

- Impulsar una campaña de concientización ecológica que se revierta en una sistemática recuperación de tecnologías apropiadas para el uso de suelos, que involucre al menos: uso de abonos orgánicos, rotación de cultivos, siembra de plantas nativas que permitan recuperar aguas en las fuentes y uso sistemático de productos naturales que sustituyan a los insecticidas y pesticidas.

En el caso de Nono los costos asociados al modelo del monocultivo intensivo demuestran no solo que la capitalización de la ganancia va hacia las transnacionales dedicadas a la comercialización de químicos o al capital financiero que entrega los créditos (que generalmente se invierten en los químicos y fertilizantes para producción agrícola), sino que también muestra el impacto que se está produciendo en la infertilidad del suelo y en la salud de los habitantes de la parroquia y de la ciudad.

La intervención que se haga en Nono debe buscar la incorporación de la economía campesina, con sus propios conocimientos y con los conocimientos que obtenga de otros saberes expertos, con el objeto de conseguir el bienestar económico y social de las propias familias campesinas y de los pobladores hacia los que se dirigen los productos. Muchas investigaciones demuestran que el monocultivo intensivo es la mejor fuente de apareamiento de insectos y plagas, lo que genera un círculo vicioso de dependencias del agricultor hacia los productores de los químicos y derivados.

Dado que la imposición del modelo agroindustrial intensivo basado en la utilización irracional de fertilizantes, pesticidas e insecticidas químicos es un asunto relativamente reciente, aún es posible iniciar una campaña de investigación y recuperación sistemática de las tecnologías apropiadas de uso del suelo, enfocadas en la construcción de la soberanía alimentaria y la recuperación y mantenimiento del ecosistema y las fuentes de agua de los que depende el futuro de la ciudad.

Como veremos seguidamente, estas políticas agrarias deben acompañarse de políticas públicas tendientes a evitar que la capitalización de los beneficios de las transformaciones agrarias termine en manos de agentes externos a la economía campesina, como los intermediarios, los comerciantes o quienes tienen capacidad de procesar los productos agrarios.



## Políticas públicas para crear mecanismos de procesamiento industrial y comercialización de la producción de la parroquia

Otros problemas que han tenido que enfrentar las economías campesinas tienen que ver con el control del procesamiento, la comercialización, distribución y venta de sus productos. Para poder imaginar el impacto que tiene el control del procesamiento y la comercialización y vislumbrar lo que sucede con las economías campesinas, quisiéramos poner como ejemplo la forma como los mismos representantes de los sectores más poderosos de Nono, como ganaderos y lecheros, expresan las asimetrías que ellos mismos tienen ante el poder de los distribuidores.

Interesados en dar un valor agregado a la producción de leche, siete ganaderos intentaron crear una industria procesadora a la que denominaron Nono Lácteos. Con esa industria llegaron a procesar 2 000 litros de leche, pero tuvieron problemas con la comercialización porque su experiencia era solo como productores. Ante esa situación tuvieron que asociarse a la industria lechera FLORALP, que terminaría cooptando la producción y disolviendo a Nono Lácteos, por su incapacidad de comercialización.

Los propios ganaderos reconocen la situación de desventaja en la que se encuentra el productor respecto a los industriales y a los comercializadores, que en última instancia imponen las condiciones, pero bajo ninguna circunstancia asumen riesgos que puedan implicar pérdidas económicas. En sus propios términos, las pérdidas siempre recaen sobre el productor, sea de lácteos o de productos agrícolas.

En el caso de las economías campesinas, la actual capacidad de procesamiento o de industrialización es nula, a la vez que se hace evidente su fragilidad en la distribución y comercialización. En varios de los barrios o comunidades que se crearon luego de los procesos de Reforma Agraria, los campesinos reactivaron antiguos modos de sujeción a los hacendados con los propietarios de vehículos que comercializaban sus productos.

En estos casos, los comerciantes hacían “adelantos” a los campesinos y aseguraban de esa forma el monopolio de la distribución, a la vez que imponían las condiciones y los precios de los productos, siempre en desventaja para los campesinos.

Esta situación se hace igual de evidente en el caso de los campesinos que directamente pueden llegar a negociar sus productos en el mercado de la Delicia o de Cotocollao. En muchos testimonios los campesinos relatan cómo al llegar al mercado los comerciantes les imponen los precios a los que tienen que someterse. Además, los comerciantes esperan que pase el día, como forma de presión para bajar aún más los precios, hasta que los campesinos cedan por el carácter perecedero de sus productos y porque no pueden regresar a su tierra con las manos vacías.

En este contexto se propone:

- Un plan de políticas públicas que busque legalizar la tenencia de la tierra de los ex trabajadores de las haciendas que conforman el núcleo poblacional de los distintos barrios de la parroquia de Nono.

Varios de los campesinos y campesinas de barrios como Yanacocha, Alambi o Alaspungo, todavía hoy no han legalizado sus posesiones, después de treinta o cuarenta años de que les fueron entregadas tierras por sus derechos laborales durante las reformas agrarias.

- Es indispensable establecer nuevos pactos sociales en torno al acceso a la tierra.

Los pactos sociales involucran tanto a los campesinos como a los hacendados, pero también al propio Municipio, como se detallará más cuidadosamente en el acápite sobre agua y medio ambiente. En algunos casos, como los de Alambi y Alaspungo o La Prenda, es necesario que los productores agrícolas actuales o potenciales puedan ampliar el acceso a las tierras, ya que la distribución que se dio en el contexto de las reformas agrarias dio un promedio de tres hectáreas a los campesinos. Esta extensión es insuficiente para crear cualquier proyecto económico, sobre todo en el contexto del crecimiento de potenciales herederos que hoy viven en los barrios de las laderas del Pichincha en Quito.

En otros casos, como Yanacocha, es necesario establecer pactos entre los propios ex trabajadores de las haciendas y fundaciones como Jocoto, para permitir el acceso de los campesinos a distintos pisos ecológicos y al disfrute de los beneficios económicos y sociales que puede generar la inversión en la protección ambiental.

El pacto social entre los distintos actores parroquiales cubre una amplia gama de problemáticas que deben ser discutidas socialmente: entre los campesinos debe promocionarse la discusión sobre cuáles son las conveniencias o inconveniencias de las formas productivas que privilegian las actividades individuales y o las colectivas.

Uno de los resultados más inquietantes de la presente investigación tiene que ver con un análisis de las condiciones que hicieron que después de los procesos de Reforma Agraria los ex trabajadores de las haciendas de Nono experimentaran formas de producción colectiva que solo funcionaron por unos pocos años. Luego, los propios ex comuneros decidieron eliminar las experiencias colectivas y eligieron una distribución individual de las propiedades y del trabajo.

Los ex trabajadores, por razones de compulsión del Estado, que los obligaba a organizarse de modo colectivo, bien por razones económicas derivadas de los compromisos adquiridos para pagar las tierras que se les entregaron o bien por la inercia de la movilización política contra los hacendados, crearon comunidades que, a su vez, fracasaron estrepitosamente por una serie de razones que se han intentado descifrar a lo largo de la investigación.

La experiencia de la disolución de las comunidades de Nono demuestra que no existe ninguna tendencia natural hacia el comunitarismo por parte de los campesinos ni de indígenas andinos, como tanto se especula en ciertas tendencias de los estudios agrarios. En la investigación en curso se ha mostrado más bien que la organización comunal es una opción política cuya pertinencia debe ser evaluada por los propios trabajadores agrícolas, así como el establecimiento de reglas y procedimientos claros en los casos en que se escoja la asociatividad como modelo adecuado. Este elemento es particularmente importante para incentivar modelos de discusión entre los propios campesinos.

Un segundo nivel en el que hay que incentivar pactos sociales tiene que ver con el sector ganadero:

- Es importante que las haciendas ganaderas, sin tener que afectar el núcleo central de su productividad, garanticen la ampliación de la propiedad campesina enfocada hacia la producción para la soberanía alimentaria.
- Se debe transparentar el tema de los impuestos como principal responsabilidad en el desarrollo de la parroquia y establecerse un pacto con las instancias oficiales respecto a la distribución de los impuestos.

Si se establece como criterio de redistribución la densidad poblacional y no proyectos de recuperación hacia el futuro, Nono continuaría condenada a no tener ninguna mejoría. Hay que establecer una política de redistribución que apoye un nuevo modelo de producción agrícola cuyos efectos pueden irse viendo a lo largo de este documento.

En este sentido, se propone:

- Apoyar la formación de asociaciones campesinas que permitan la capacitación permanente de sus socios y la creación de métodos y técnicas de procesamiento y comercialización de productos agrícolas.

Se trata de permitir que el campesinado se convierta en un actor poderoso que pueda gestionar de manera asociativa el procesamiento y la comercialización de sus productos hasta su colocación en las manos de los usuarios. Estas formas asociativas deberán poder adquirir tractores para la producción, vehículos para la comercialización de productos y acceder a puestos en los mercados en representación directa de los productores, así como maquinarias necesarias para el procesamiento de alimentos. También deberán facilitar una capacitación permanente de las familias campesinas en procesamiento y distribución de alimentos con lineamientos agroecológicos, vinculados a los principios de la solidaridad y la equidad.

Vale mencionar que uno de los ítems que tiene especiales posibilidades en la parroquia y en la producción campesina es el procesamiento de la leche para yogurt y diversos tipos de quesos. De otro lado, las peticiones de los propios campesinos dan importancia a la cría sana, faenamiento, consumo y comercialización de gallinas y chanchos que pueden convertirse en una interesante vía de capitalización y de consumo para las economías campesinas y los habitantes de Quito.

En este sentido, se propone:

- Apoyar el acceso a créditos favorables y de apoyo a las economías campesinas, estableciendo los mecanismos y las reglas del juego en sus fases de producción, procesamiento y circulación.

Si bien es cierto que una de las razones por las cuales se ha producido el desplazamiento de la producción agrícola hacia las transnacionales es que el uso intensivo de abonos químicos, fertilizantes y plaguicidas aumentó exponencialmente el nivel de producción, es necesario introducir cálculos económicos que muestren el costo y los riesgos que representan para la salud humana y ambiental el uso indiscriminado de los productos agroquímicos.

En la investigación actual, los campesinos de Nono dan una serie de testimonios del proceso de deterioro de la producción, derivada del uso de químicos. Es indispensable que en los cálculos económicos de la producción campesina para el acceso a créditos se introduzcan las variables sobre la salud humana y ambiental. De otro lado, diversas tendencias muestran el apareamiento de un creciente mercado de consumidores de productos orgánicos. Sin embargo, este mercado de consumidores empieza a ser cooptado también por quienes manejan la circulación y la distribución.

Por eso se recomienda que el diseño de una política de créditos para la producción campesina considere el desarrollo de mecanismos claros de circulación y distribución de los productos agroecológicos por parte de los propios campesinos.

## Políticas públicas para los problemas de despoblamiento de la zona de Nono

Otro de los problemas graves que han enfrentado los pobladores de Nono, luego de las transformaciones agrarias de los años setenta, es el sistemático despoblamiento de los barrios y comunidades y el desplazamiento de sus habitantes hacia barrios ubicados en su mayoría en las laderas del Pichincha. Es importante tomar en cuenta que Nono es la parroquia de Quito con menor densidad poblacional: 0,03 habitantes por hectárea. El despoblamiento de los barrios de Nono es impresionante, incluso se están cerrando las escuelas por falta de niños.

La formulación de políticas públicas en este acápite parte de una pregunta radical: ¿es necesario plantear una política de repoblamiento de zonas del Quito rural como Nono? La respuesta es que sí. Para esto es necesaria una formulación de políticas públicas vinculadas a una transformación categórica del modelo de monocultivo. Este es el mecanismo para hacer realidad el anhelo de construcción de la soberanía alimentaria.

De otro lado, el repoblamiento de la parroquia debe hacerse únicamente con el objetivo de fomentar la producción agrícola de base campesina, sustentada en un nuevo pacto social. El repoblamiento del campo es indispensable para aliviar la presión en la ciudad, para recuperar la potencialidad alimentaria de las zonas agrarias, para recuperar las zonas ambientalmente cruciales como los bosques y las aguas.

Sin embargo, este repoblamiento solo es posible si se establece un nuevo pacto social que involucre claras reglas de juego para los productores agrícolas, alta inversión en capacitación y creación de infraestructura y acceso de los productores a distintas zonas ecológicas, actualmente en manos de la mono-producción y el monocultivo. Hay que dar un nuevo valor a la producción basada en el pluricultivo y a la producción orgánica y sana, sin esperar que este valor esté determinado por transnacionales que ya empiezan a percibir en la producción orgánica uno de los campos más importantes del futuro por su conexión directa con la salud humana y la conservación ambiental.

El diseño de políticas públicas para el repoblamiento de las áreas rurales involucra aspectos relacionados con la producción, la distribución y con el mismo consumo de los productos, así como temas relacionados con la redistribución de las tierras y el diseño de mecanismos de acceso y preservación de las fuentes hídricas.

En este contexto, se propone:

- Motivar una política de capitalización de la producción campesina que estimule el retorno de campesinos a Nono, especialmente los propios nativos de Nono que expresan interés en volver y que han salido en las últimas décadas.

En la investigación que sustenta este documento de propuestas de políticas públicas se ha detectado que el desplazamiento hacia Quito no ha significado una mejoría ni económica ni social para los miembros de la mayoría de las familias que hemos entrevistado. Quienes han salido de Nono habitan actualmente barrios en condiciones de marginalidad. La actividad económica mayoritaria de los hombres es la albañilería y las mujeres se dedican a actividades de servicio doméstico.

Aunque no se ha hecho un análisis estadístico de la condición de los inmigrantes de Nono en términos de los niveles de escolaridad y de asistencia al colegio, las entrevistas en profundidad realizadas a un número pequeño de familias de noneños permite inferir que hay un aumento relativo en el acceso a la escuela y al colegio, una de las razones por las cuales las familias se han desplazado a Quito. Sin embargo, en las personas entrevistadas el aumento de los niveles de escolaridad no ha estado acompañado de una mejoría en el acceso a puestos laborales, ya que las condiciones de competencia en la ciudad exigen no solo terminar la secundaria sino terminar una profesión para poder acceder a trabajos cualificados, lo que requiere egresos que no pueden sostener las familias de los educandos.

En este sentido, proponemos que:

- La política pública de repoblamiento, además de considerar a la producción agroecológica campesina, su procesamiento y distribución como la principal fuente laboral de zonas como Nono, tiene que venir acompañada de la construcción de infraestructura adecuada para los habitantes, tanto en el área de salud como en el área educativa.

Hay que crear escuelas primarias pluridocentes de calidad, con una adecuada infraestructura de transporte, que asegure la asistencia de los niños y niñas que viven en las casas más alejadas de los barrios rurales que conforman la parroquia. En el caso del colegio parroquial, debe desarrollarse un proyecto de alta calidad, pertinente para las necesidades parroquiales y con un sistema de transporte que permita el acceso de los niños y niñas de los barrios o, en su defecto, un sistema de internado que permita que los estudiantes estén en el colegio de lunes a viernes y pasen con sus familias los fines de semana y las vacaciones.



## Políticas públicas para el área ambiental

Ecuador es un país pionero en la elaboración de una nueva noción de valor relacionado con la preservación y recuperación de la ecología, como se ha hecho manifiesto en el apoyo a la propuesta internacional Yasuní ITT. Este antecedente da un fuerte peso político a la revalorización de la naturaleza y de la preservación, lo cual puede convertirse en un factor de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de parroquias rurales como Nono.

En la investigación los principales problemas ambientales que se han detectado tienen que ver con el uso irracional de agroquímicos que, como se ha dicho, terminan empobreciendo tanto al suelo como a las economías campesinas.

Otro de los problemas detectados es el deterioro de las condiciones de acceso al agua en la parroquia, fenómeno que se produce por distintas razones, como el control y la monopolización de las fuentes de agua por parte de las haciendas o la tala de bosques, que en muchos casos se da en los propios ojos de agua y que ha sido históricamente estimulada por los campesinos para poder acceder a recursos económicos, como sucede con la quema de madera para elaborar carbón vegetal.

Otro factor que incide en el deterioro ambiental y en la falta de acceso a los recursos hídricos por parte de las unidades campesinas son las políticas de la EMAAP, que captan la casi totalidad del agua en las fuentes, dejando casi sin recursos a las familias campesinas, como se hace evidente en barrios como Yanacocha o Alaspungo.

En este contexto, se proponen las siguientes políticas públicas que inciden en el plano ambiental de la parroquia:

- Establecer un nuevo pacto social que permita armonizar el acceso a los recursos hídricos por parte de los pobladores campesinos, sobre quienes recae la producción encaminada a la soberanía alimentaria, los ganaderos, que actualmente controlan y monopolizan la gran mayoría del agua de la zona que es destinada al mantenimiento de pastizales para aumentar la producción de leche, y la EMAAP, como ente del Municipio encargado del control y la distribución oficial del agua.

Este nuevo pacto debe partir del derecho de los campesinos al acceso al agua como requisito para lograr soluciones estructurales a problemas vinculados tanto al deterioro ambiental como a la migración y al desplazamiento irracional de poblaciones. El pacto debe contemplar las proporciones, los mecanismos y las responsabilidades que tienen tanto los campesinos, como los ganaderos y el Municipio en la preservación, uso y distribución del agua como un bien vital y público.

- Impulsar proyectos de ecoturismo como mecanismo de conseguir beneficios para la población local, que a su vez se revertirían en inversiones para la recuperación y el mantenimiento de zonas ambientalmente cruciales (esta es una petición explícita de los campesinos organizados de barrios como Alaspungo, y en parte también de Yanacocha, así como de propietarios de bosques protegidos).

La elaboración de políticas públicas de apoyo ecoturístico deben venir acompañadas de un amplio plan de capacitación y de creación de infraestructura que permita que los réditos producidos de esta actividad recaigan principalmente en los propios pobladores de la zona, no en inversionistas o propietarios de grandes cadenas turísticas que controlan y monopolizan los paquetes turísticos en los que generalmente las poblaciones nativas forman parte del paisaje y reciben los menores beneficios.

- Capacitación para el uso de técnicas agrícolas ambientalmente sustentables, como los abonos orgánicos, y el apoyo para el acceso y uso de tractores.

## Políticas públicas para el campo de la educación y la salud

Uno de los problemas que más afectan a los sectores marginados de la parroquia de Nono son los relacionados con educación y salud. Las tasas de alfabetismo en Nono llegan al 75,81% y los años de escolaridad alcanzan el 3,95%. Este porcentaje es el más bajo de todas las parroquias rurales de Quito. Adicionalmente, ninguna persona asiste a la educación superior.

Los problemas vinculados a la salud de los habitantes de Nono son acuciantes, tomando en cuenta el proceso de envejecimiento de la población. En este sentido, las políticas de salud deben estar especialmente diseñadas para los ancianos. Los testimonios de los ancianos de la parroquia revelan una serie de enfermedades que requieren tratamientos especiales, como las cataratas, artritis, reumatismo y depresión.

En este sentido, se propone:

- Mejorar notablemente el sistema educativo para que aspire a la misma calidad educativa de las mejores escuelas y colegios del área urbana de Quito.

Estas nuevas escuelas deben promocionarse con fuerza entre la población de Nono, que hoy puebla los barrios del noroccidente de Quito. Es necesario introducir la pluridocencia en las escuelas primarias y apoyar una educación de calidad en el colegio de Nono, que actualmente se encuentra ubicado en la cabecera parroquial. Se debe crear un sistema de transporte fiscal que permita la movilización de los estudiantes a sus escuelas y al colegio para asegurar la asistencia de todos y todas, especialmente los que viven lejos. En el caso del colegio debe considerarse la implementación de un internado de lunes a viernes. Todas las escuelas y el colegio deben estar dotadas de bibliotecas y sistemas de computación que permitan incentivar el espíritu investigativo entre los niños y jóvenes desde temprana edad.

- A través del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, la Prefectura, el Municipio y la Junta Parroquial, debe crearse un sistema de becas para los estudiantes de Nono con vocación y motivación de emprender la educación superior. Así se reducirían las notorias desventajas de la parroquia en la formación de estudiantes a nivel superior.

Sin perjudicar a quienes quieran llevar adelante cualquier carrera, debe darse especial consideración a aquellos que a través de la educación superior puedan incidir en el futuro de la parroquia. De especial importancia serían carreras de desarrollo parroquial, de agroecología para la soberanía alimentaria, de formas de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de alimentos sanos, de desarrollo sostenible y sustentable, de desarrollo comunitario, de ecoturismo, de geriatría, etc.

## Políticas públicas para el campo de la cultura y la política

Finalmente, encontramos una serie de problemáticas vinculadas con el aspecto cultural. Junto al proceso de migración, las tasas de pobreza, analfabetismo, la crisis agraria, entre otras, hay una pérdida del sentido de pertenencia y de la memoria, lo que incide en un franco debilitamiento del tejido social.

Uno de los objetivos centrales de la investigación realizada en Nono fue la recuperación de la memoria social de los conflictos y los arreglos sociales que han existido en la parroquia en los últimos cuarenta o cincuenta años, cuando empezaron a producirse transformaciones agrarias causadas por razones económicas y políticas que trascendían el espacio local.

Conscientes de que una gran parte de los y las protagonistas de estos acontecimientos están vivos, y reconociendo la importancia que tiene para la región y para el país el hecho de que esa memoria no se pierda, nos propusimos no solo recolectar la historia oral de la región sino también diseñar mecanismos para que esta información volviera del mejor modo a los propios habitantes de la parroquia.

La memoria y la cultura son fundamentales para crear un nuevo sentido de pertenencia social y para potenciar una participación activa de la población en los proyectos co-participativos que se elaboren para regiones como Nono. De otro lado, en la investigación se ha privilegiado el uso de una metodología nutrida de las contribuciones de la etnografía colaborativa, la investigación-acción y la antropología pública. La metodología que tentativamente denominamos dialógico crítica ha buscado rastrear con los propios pobladores de la parroquia las razones culturales que han reforzado las condiciones estructurales que los condujeron a la difícil situación que hoy atraviesan los pobladores de la parroquia.

A partir de estos antecedentes, las líneas de política pública que posibilitarían la creación de un capital cultural y un tejido social que apunte a la construcción de una sociedad deliberativa y con fuerte sentido de pertenencia social son las siguientes:

- Crear y apoyar el mantenimiento de una infraestructura multifuncional al servicio de la riqueza y del empoderamiento cultural de los habitantes de Nono.

Esta infraestructura debe contemplar bibliotecas y videotecas infantiles, juveniles y generales, con políticas claras de intercambio, suscripción, compra y venta de libros y material filmico, y debe estar asociada a proyectos generales de este tipo que eventualmente se estén llevando a cabo desde el Municipio o desde la Prefectura.

La política de construcción de centros multifuncionales busca abrir un problema relegado, tanto en la investigación social como en la implementación de políticas públicas. Por lo general, las pocas intervenciones culturales en los espacios rurales priorizan el apoyo a fiestas tradicionales y la construcción de canchas de volley, lo cual implícitamente apoya el consumo de licor.

La presente investigación ha mostrado cómo las demandas y expectativas de los pobladores de Nono van mucho más allá, como sucede cuando hablan de las ventajas de vivir en la ciudad o de la necesidad de educación de calidad para sus hijos, buenas escuelas o espacios donde reunirse, como las áreas comunales. En el caso de Nono, especial atención requiere la construcción de áreas recreativas pensadas especialmente para una población de adultos mayores, con la seguridad y amabilidad que esta población requiere.

- Elaborar una política integral de construcción de centros de archivo y metodologías populares que permitan la recopilación, el archivo y la difusión de saberes existentes en la zona y que han sido invisibilizados por legados neocoloniales.

La investigación que nutre el presente documento propone una forma pionera de construcción de esos archivos, que devuelve a las comunidades el material que se ha producido en la investigación y proyecta la realización de actividades culturales que permitan la más amplia difusión de los resultados.

La metodología implementada en la investigación también ha tenido como premisa principal elaborar de manera co-participativa los problemas de la investigación y detectar con los propios actores de la parroquia, tanto los problemas centrales que existen allí, como las eventuales estrategias de solución a esos problemas.

Es importante mostrar la función pública que tiene la investigación social y su pertinencia en el momento de establecer diagnósticos sociales y proponer soluciones a los problemas encontrados. Con el apoyo de metodologías co-participativas, se propone la creación de espacios de memoria y activismo político de los grupos, que ayuden a construir un tejido social que tenga como premisa central la construcción de sociedades deliberativas y críticas que construyen la base de los proyectos políticos de la democracia radical.

## Resumen

Este libro aborda el impacto de las reformas agrarias de 1964 y 1972 en Nono, una parroquia rural de Quito. El trabajo muestra cómo a pesar de que hubo experiencias relativamente fuertes de organización campesina, las haciendas ganaderas utilizaron para su propio beneficio las demandas modernizadoras que impuso el estado en los procesos de reforma agraria. El liderazgo de las haciendas ganaderas contribuyó a la descomposición de las economías campesinas y forzó un masivo desplazamiento de la población rural de la parroquia hacia los barrios noroccidentales de Quito. Se muestra cómo el campesinado organizado no pudo administrar las tierras colectivas que pudo comprar luego de la reforma agraria. Para venderles la tierra el estado exigió a los campesinos que se organizaran colectivamente pero no les ofreció los ingresos necesarios para hacer que la producción colectiva compitiera con la hacienda. Los campesinos tampoco pudieron resolver públicamente los problemas derivados de la administración colectiva de sus tierras. En este contexto, los campesinos hicieron un uso irracional de abonos y pesticidas, se endeudaron con los bancos y terminaron abandonando el campo.

## Glosario

- **Chiguagua:** juego practicado en las haciendas, similar a la vaca loca, con personas disfrazadas de vaca y juegos pirotécnicos, pero más pequeño.
- **Economía moral:** corriente de la historia y del pensamiento social que establece que los campesinos e indígenas privilegian las relaciones concretas del ámbito familiar a las abstracciones del mercado o del estado. En este trabajo se considera que no necesariamente es una opción campesina sino que puede ser un modelo creado y apoyado por los poderes locales como los terratenientes o por el estado.
- **Huagracamac:** palabra quichua que designa al cuidador del ganado dentro o fuera de las haciendas.
- **Ecuarunari** acróstico de -Ecuador Runacunapac Riccharimui- que significa el despertar del indígena eucatoriano.
- **Huasipungo:** forma de explotación de la mano de obra campesina e indígena, a la que se vincula de modo obligado a la hacienda a partir de la entrega de un pedazo de tierra quienes trabajan uno o dos días a la semana y el resto deben trabajar en la tierra del hacendado.
- **Huasipunguero:** campesino que trabaja en la modalidad de huasipungo.
- **Media agüita:** expresión para referirse a una casa muy modesta en términos arquitectónicos y habitacionales.
- **Potreraje:** derecho a pastar los animales en un terreno a cambio de alguna contraprestación.
- **Precarismo:** situación laboral en la cual no existen un claro establecimiento ni el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Se puede hacer extensiva a otras situaciones más allá de lo laboral.
- **Yanapa:** en quichua ayuda, forma de trabajo rotativo en el que algunas familias prestan favores a otras que los devuelven posteriormente.



El análisis de las parroquias rurales de Quito es un asunto estratégico. Distintos estudios de las denominadas interfases periurbanas sostienen que el análisis e investigación de las conexiones entre lo urbano y lo rural ofrece contribuciones fundamentales para el diseño de políticas públicas a favor tanto de los espacios urbanos como de los rurales. Asimismo, permite detectar las continuidades y discontinuidades en las problemáticas urbanas y rurales e incluso demuestra empíricamente la justeza o no de dicha categorización.

Por ello, el Instituto de la Ciudad se propuso como una de sus líneas centrales la investigación de las parroquias rurales de Quito, y el trabajo realizado en la parroquia de Nono ha demostrado la pertinencia del desarrollo de esta línea de problemas. Nono es una parroquia cuya cabecera se localiza a solo 18 kilómetros de la capital, pero que a pesar de esta cercanía tan visible aparece como un mundo distante y desarticulado de la historia y de los procesos de la ciudad de Quito.